CONGRESO DE LA REPÚBLICA
ÁREA DE TRÁMITE Y DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS
06 MAYO 2022
RECIBIDO
Firma: Hora: 17:46 h.

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: GONZA CASTILLO Américo FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 05/05/2022 11:08:18-0500

Dictamen aprobado por **UNANIMIDAD,** recaído en el Proyecto de Ley **1375/2021-CR** que, con texto sustitutorio, propone la ley que modifica el Decreto Legislativo 1075, decreto legislativo que aprueba disposiciones complementarias a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que establece el régimen común sobre propiedad industrial, simplificando el registro, la renovación y la protección de las marcas y elementos de la propiedad industrial.

COMISIÓN DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR Y ORGANISMOS REGULADORES DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

PERIODO ANUAL DE SESIONES 2021-2022

Señora Presidenta:

Ha sido remitido, para dictamen de la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos el Proyecto de Ley **1375/2021-CR**, presentado por el grupo parlamentario Avanza País a iniciativa de la congresista Adriana Tudela Gutiérrez, por el que se propone el proyecto de ley que simplifica el registro, la renovación y la protección de las marcas.

En la Décima Octava Sesión Ordinaria de la Comisión realizada el martes 3 de mayo de 2022 se aprobó el dictamen por **UNANIMIDAD**. Con **9** votos a favor de los señores congresistas José Luna Gálvez; Américo Gonza Castillo; Adolfo Tacuri Valdivia; Janet Rivas Chacara; Luis Cordero Jon Tay; Auristela Obando Morgan; Silvia Monteza Facho; Miguel Ángel Ciccia Vásquez y Ilich Fredy López Ureña. No hubo votos en contra ni abstenciones.

I. SITUACIÓN PROCESAL

Antecedentes procedimentales

El Proyecto de Ley **1375/2020-CR** fue presentado ante el Área de Trámite Documentario el 28 de febrero de 2022. Fue decretado e ingresado a la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos como única comisión dictaminadora, el 3 de marzo de 2022, para su estudio y dictamen.

Antecedentes parlamentarios

Se ha realizado una búsqueda en la página web del Congreso de la República, no encontrando de antecedentes parlamentarios relacionados con la materia de la propuesta legislativa.

II. CONTENIDO DE LA PROPUESTA

El Proyecto de Ley 1375/2021-CR, por el que se propone el *proyecto de ley que simplifica el registro, la renovación y la protección de las marcas. El contenido del texto dispositivo del proyecto de ley es la siguiente:*

Artículo 1. Objeto de la ley

La presente ley tiene por objeto modificar diversos artículos del Decreto Legislativo N° 1075, Decreto Legislativo que aprueba Disposiciones Complementarias a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial, a fin de simplificar el procedimiento de registro y renovación del registro de marca y, asimismo, eliminar exigencias costosas para el administrado. También se pretende reducir los plazos establecidos para las solicitudes de visita inspectiva y medida cautelar, con el objetivo de fortalecer y hacer más efectivos los mecanismos de protección marcaria frente a terceros.

Artículo 2. Modificación de los artículos 58, 61-A, 61-13, 64, 99 y 112 del Decreto Legislativo N° 1075, Decreto Legislativo que aprueba Disposiciones Complementarias a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial.

Se modifican los artículos 58, 61-A, 61-B, 64, 99 y 112 del Decreto Legislativo N° 1075, Decreto Legislativo que aprueba Disposiciones Complementarias a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial, en los siguientes términos:

"Artículo 58. Registro multiclase

Cuando en una solicitud única se hayan incluido productos vio servicios que pertenezcan a más de una clase de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios de Niza, dicha solicitud dará por resultado un único registro.

El titular de un signo registrado que distingue productos o servicios específicos, podrá obtener un nuevo registro para el mismo signo, a condición que éste distinga productos o servicios no cubiertos en el registro original. La nueva solicitud de registro se tramitará en forma independiente, siguiéndose los procedimientos que el presente Decreto Legislativo señala para el trámite de registro.

El monto de la tasa por el concepto del registro de hasta tres (3) clases de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios de Niza constituirá un pago único, el cual no podrá ser superior al 12% de la UIT vigente, siempre que las tres (3) clases se encuentren vinculadas o tengan conexión competitiva.

Artículo 61-A.- Presentación de solicitud de renovación del registro

La solicitud de renovación del registro, por el titular o quien tuviera legítimo interés debe presentarse ante la Dirección competente, cumpliendo con los requisitos establecidos en los artículos 50 y 51, en lo que corresponda.

Si del examen resulta que la solicitud de renovación del registro no posee observaciones o irregularidades, el procedimiento tendrá un plazo máximo de diez (10) días hábiles desde la fecha de presentación de la solicitud, sujeto a silencio administrativo positivo.

Artículo 61-B. Subsanación de irregularidades de solicitud de renovación del registro

Si del examen resulta que la solicitud de renovación del registro, no cumple con los requisitos formales establecidos en el presente Decreto Legislativo, la Dirección competente notifica al solicitante para que, en un plazo de treinta (30) días hábiles siguientes a su notificación, subsane las irregularidades. Si a la expiración del plazo señalado, no se han subsanado las irregularidades, la solicitud se considera abandonada, poniéndose fin al procedimiento.

Tratándose del pago de la tasa, se otorga un plazo de dos (02) días hábiles. Si a la expiración del plazo señalado, no se ha cumplido con acreditar el pago respectivo, la solicitud se tiene por no presentada.

Cuando se deba subsanar irregularidades, el plazo máximo del procedimiento de renovación del registro a cargo de la entidad competente no podrá superar los cuarenta (40) días hábiles desde la fecha de presentación de la solicitud.

Artículo 64. Solicitud de inscripción de modificaciones

La solicitud de inscripción de modificaciones y otros actos que afecten al registro deberá presentarse ante la Dirección competente, cumpliendo con los requisitos establecidos en los artículos 50 y 51 de este Decreto Legislativo, y con las formalidades establecidas en el artículo 14 del presente Decreto Legislativo, en lo que corresponda.

El procedimiento de modificación tendrá un plazo máximo de diez (10) días hábiles desde la fecha de presentación de la solicitud, sujeto a silencio administrativo positivo.

No procede presentar oposición contra las solicitudes de inscripción de modificaciones y otros actos que afecten el registro, sin perjuicio de las acciones legales que pudieran corresponder.

Artículo 99. Procedimiento a solicitud de parte
[..]

99.3 Para el procedimiento de solicitud de visita inspectiva, el plazo máximo establecido no deberá superar los diez (10) días hábiles, desde la fecha de presentación de la solicitud."

Artículo 112. Solicitud y modificación de las medidas cautelares

Las solicitudes de medidas cautelares se presentan por el titular del derecho respectivo y deben cumplir con los mismos requisitos previstos en el artículo 99 del presente Decreto Legislativo en lo que corresponda. De no cumplir con tales requisitos, se notifica al solicitante para que subsane las omisiones en las que se hubiera incurrido en el plazo de dos (02) días hábiles, bajo apercibimiento de tenerse por no presentada la solicitud.

Las medidas cautelares deberán ser concedidas o rechazadas en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles desde la fecha de presentación de la solicitud.

Las medidas cautelares pueden ser modificadas o levantadas durante el curso del procedimiento, de oficio o a instancia de parte".

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL

ÚNICA. Adecuación

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) deberá adecuar su Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) en un plazo no mayor de sesenta (60) días hábiles desde la fecha siguiente de publicación de la presente ley.

Los procedimientos a cargo de los órganos competentes del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) que, a la fecha se encuentren en trámite, continúan siendo tramitados bajo las normas anteriores a la vigencia de esta ley.

III. MARCO NORMATIVO

a) Legislación nacional

- Constitución Política del Perú de 1993: artículos 2, 55, 59, 65,
- Decreto Legislativo N° 1075, Decreto Legislativo que aprueba disposiciones complementarias a la *Decisión 486* de la Comisión de la Comunidad Andina que establece el régimen común sobre propiedad industrial.
- Decreto Legislativo 757, Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada
- Decreto Legislativo Nº 943, Ley del Registro Único de Contribuyentes, publicado el 20 de diciembre de 2003, artículos 3 y 4;
- Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, (D.S. N° 004-2019- JUS), publicado el 25 de enero de 2019, artículos 38, 48, 49, 124 y 125.
- Decreto Supremo N° 059-2017-PCM, Reglamento del Decreto Legislativo N° 1075, Decreto Legislativo que aprueba disposiciones complementarías a la Decisión 486 de la Comunidad Andina que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial y sus modificaciones, publicado el 29 de mayo de 2017, artículos 2 y 19.
- Decreto Legislativo N° 295, Código Civil, publicado el 25 de julio de 1984, artículo 315.
- Decreto Ley 28677, Ley de la Garantía Mobiliaria y Reglamento aprobado por Decreto Legislativo N° 142- 2006/SN del 26 de mayo de 2006, artículo 4.
- Convenio de la Haya aprobado mediante Resolución Legislativa N° 29445.
- Decreto Legislativo Nº 807, Ley sobre facultades, normas y organización del Indecopi, publicado el 18 de abril de 1996, artículos 1, 2 y 26, y sus modificatorias.

b) Legislación Internacional

- La Comisión de la Comunidad Andina, en la Decisión 486, que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el proceso 55-IP-20203 fundamento 2.10
- Decisión 689, Adecuación de determinados artículos de la Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial, para permitir el desarrollo y profundización de Derechos de Propiedad Industrial a través de la normativa interna de los Países Miembros, publicada en la Gaceta Oficial de la Comunidad Andina el 15 de agosto de 2008, artículo 138 y 162;

IV. ANÁLISIS DE LA PROPUESTA LEGISLATIVA

a) Análisis técnico

1) Normativa comunitaria sobre propiedad industrial

Tal como lo ha señalado el CEPI[1] *"En nuestro país, es posible realizar modificaciones a la normativa vigente sobre Propiedad Industrial, siempre que la norma nacional sea siempre compatible con la Normativa Comunitaria Andina, entendiéndose que toda norma nacional que la pueda distorsionar o sea contraria a sus disposiciones no es aplicable. Asimismo, el artículo 276° de la Decisión 486° autoriza a los países miembros implementar normativas internas sobre Propiedad Industrial que no estén comprendidas en la mencionada Decisión, sin embargo, siempre sobre la base de lo señalado anteriormente, es decir, siempre que la norma nacional no sea contraria ni distorsione la norma comunitaria".*

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el proceso 55-IP-20203 fundamento 2.10 señala lo siguiente:

> *"Cuando la norma comunitaria deja a la responsabilidad de los Países Miembros la implementación o desarrollo de aspectos no regulados por aquella, les corresponde a esos países llevar a cabo tales implementaciones, sin que estas puedan establecer, desde luego, exigencias, requisitos adicionales o constituir reglamentaciones que de una u otra manera afecten el derecho comunitario o, restrinjan aspectos esenciales por él regulados de manera que signifiquen, por ejemplo, una menor protección a los derechos consagrados por la norma comunitaria."*
> (el subrayado es nuestro).

El Perú como país miembro de la Comunidad Andina de acuerdo a lo establecido en el artículo 278° de la Decisión 486°, está comprometido en la búsqueda de la consolidación del sistema de administración comunitario andino garantizando la mejor aplicación de las disposiciones contenidas en la norma comunitaria.

> *"Los Países Miembros, con miras a la consolidación de un sistema de administración comunitaria,* ***se comprometen a garantizar la mejor aplicación de las disposiciones contenidas en la presente Decisión****. Asimismo, se comprometen a fortalecer, propender a la autonomía y modernizar las oficinas nacionales competentes y los sistemas y servicios de información relativos al estado de la técnica (...)".*

De lo señalado colegimos que toda modificación a la normativa vigente sobre Propiedad Industrial, debe ser compatible con la Normativa Comunitaria Andina es decir con la Decisión *486.*

a) Procedimiento de registro de marcas de productos, servicios, colectivas y de certificación, nombres comerciales y lemas comerciales

El artículo 24 del Decreto Legislativo N° 1075 establece como plazo máximo para la tramitación de los procedimientos administrativos regulados ciento

[1] Centro de Estudios de Propiedad Industrial – CEPI.

ochenta (180) días hábiles; sin perjuicio de los establecido en normas especiales o de los plazos que se deriven de la propia naturaleza del respectivo procedimiento.

Al amparo del mencionado artículo, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), es la agencia de competencia encargada, entre otros, de supervisar, registrar y proteger la propiedad industrial, regula sus procedimientos y plazos para el registro de marcas en su Texto Único de Procedimientos Administrativos (Tupa).[2]

El procedimiento de registro es el procedimiento administrativo en virtud del cual se otorga el derecho exclusivo de un signo distintivo a partir de su inscripción en el Registro de la Propiedad Industrial, brindando así protección jurídica frente a terceros. Este procedimiento es aplicable al registro de marcas de productos, servicios, colectivas y de certificación, nombres comerciales y lemas comerciales.

El plazo legal máximo de este procedimiento es de ciento ochenta (180) días hábiles contados desde la presentación de la solicitud. No obstante, en la práctica, la Dirección demora en promedio entre 45 y 55 días hábiles para tramitar este procedimiento, en tanto no se presente oposición. Los requisitos de la solicitud y otros detalles del procedimiento pueden revisarse en el TUPA.

La solicitud debe cumplir con los requisitos mínimos legales a efectos de que se le asigne una fecha de presentación.

De no cumplir con tales requisitos mínimos o requisitos de forma, la DSD requiere la subsanación correspondiente. 10. Superada la etapa de examen de forma de la solicitud de registro, la DSD la publica en la Gaceta Electrónica de Propiedad Industrial.

Transcurrido el plazo antes señalado, en caso no se haya presentado oposición, la DSD procede a realizar el examen de registrabilidad del signo solicitado y mediante resolución se pronuncia sobre su concesión o denegatoria.

Dentro del plazo de quince días hábiles de notificada la resolución de primera instancia, el solicitante puede interponer los recursos de apelación o de reconsideración que estime pertinentes.

b) Silencio Administrativo en los procedimientos de renovación de registro y de actos modificatorios como procedimientos

Los procedimientos de renovación de registro y de actos modificatorios como procedimientos están sujetos al silencio administrativo negativo, de conformidad con lo establecido en el artículo 38, numeral 38.1 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, al tratarse de procedimientos de inscripción registral, además de ser objeto de verificación del cumplimiento de requisitos contemplados en la normativa aplicable.

[2] Ver https://www.indecopi.gob.pe/tupa. Exposición de motivos, Proyecto de Ley 1375/2021-CR.

c) tasas administrativas

El numeral 40.5 del artículo 40 del TUO de la Ley de Procedimiento Administrativo General establece que: "Las disposiciones concernientes a la eliminación de procedimientos o requisitos o a la simplificación de los mismos pueden aprobarse por Resolución Ministerial, por Resolución de Consejo Directivo de los Organismos Reguladores, Resolución del órgano de dirección o del titular de los organismos técnicos especializados, según corresponda, Resolución del titular de los organismos constitucionalmente autónomos, Decreto Regional o Decreto de Alcaldía, según se trate de entidades dependientes del Poder Ejecutivo, Organismos Constitucionalmente Autónomos, Gobiernos Regionales o Locales, respectivamente."

El artículo 44.5 del artículo 44 del mismo cuerpo normativo señala:

> *Una vez aprobado el TUPA, toda modificación que no implique la creación de nuevos procedimientos, incremento de derechos de tramitación o requisitos, se debe realizar por Resolución Ministerial del Sector, o por resolución del titular del Organismo Autónomo conforme a la Constitución Política del Perú, o por Resolución de Consejo Directivo de los Organismos Reguladores, Resolución del órgano de dirección o del titular de los organismos técnicos especializados, según corresponda, Decreto Regional o Decreto de Alcaldía, según el nivel de gobierno respectivo. ..*

En concordancia con ello, el numeral 19.1 del artículo 19 de los Lineamientos para la aprobación del Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) aprobado mediante Resolución de Secretaría de Gestión Pública N° 005-2018-PCM-SGP, Lineamientos señala que una vez aprobado el TUPA, toda modificación que no implique la creación de nuevos procedimientos administrativos y servicios prestados en exclusividad, incremento de derechos de tramitación o requisitos, se aprueba, entre otros por el titular de los organismos técnicos especializados.

El Indecopi es un Organismo Técnico Especializado; razón por la cual el INDECOPI está comprendido dentro de los alcances de la facultad de simplificar los procedimientos administrativos y servicios prestados en exclusividad contenidos en el TUPA de la entidad. En ese sentido, la Presidencia Ejecutiva, en su calidad de máxima autoridad del Indecopi, se encuentra facultada para emitir la resolución que modifica por simplificación administrativa el Procedimiento.

Atendiendo a lo expuesto, para formular modificaciones que implican la reducción de tasas administrativas, no se requiere que estas se encuentren contempladas en una norma con rango de Ley.

El artículo 16 de los Lineamientos para la aprobación del Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) establece que el monto del costo real de los derechos del procedimiento se establece en función al costo derivado de las actividades dirigidas a resolver lo solicitado y los gastos de operación y mantenimiento de la infraestructura.

El Decreto Supremo N° 064-2010-PCM, que aprueba la metodología de determinación de costos de los procedimientos administrativos y servicios prestados en exclusividad comprendidos en los Textos Únicos de

Procedimientos Administrativos (TUPA) de las Entidades Públicas, con el fin de establecer disposiciones de carácter general que precisen criterios, procedimientos y metodologías para la determinación de los costos de los procedimientos y servicios administrativos que brinda la administración y para la fijación de los derechos de tramitación, metodología que es de cumplimiento obligatoria para todas las entidades pública.

d) Procedimiento de la renovación de registros de marcas de productos, servicios, colectivas y de certificación, nombres comerciales y lemas comerciales

La renovación de registros es un procedimiento administrativo que permite prorrogar la vigencia de los registros de signos distintivos por 10 años.

El plazo máximo legal de este procedimiento es de ciento ochenta (180) días hábiles contados desde la presentación de la solicitud. Según el Indecopi si se utiliza la plataforma de renovación virtual, el procedimiento que comprende el envío de la solicitud y generación de número de resolución puede demorar de 3 a 5 minutos, solo en los casos que el solicitante sea el titular o a través de un representante acreditado quien recibirá en un plazo máximo de dos días hábiles la respectiva resolución, con firma digital; en los demás casos, se debe verificar el cumplimiento de los requisitos del TUPA en cuanto al poder y la legitimidad.

El canal virtual proporcionado por la plataforma de renovación en línea no es el único mecanismo empleado para presentar una solicitud de renovación. Los usuarios también presentan estas solicitudes usando el canal físico (a través de la mesa de partes presencial y la virtual), y si bien este último canal es usado en menor proporción respecto a la plataforma de renovación en línea, ya que representa un 20 % del total de solicitudes de renovación, su atención requiere de una serie de actividades y participación de un equipo mayoritario de examinadores.

Se dan también el ingreso manual de los datos de la solicitud, creación de número de expediente, derivación de la solicitud a la DSD, asignación al profesional encargado del trámite quien evalúa el cumplimiento de los requisitos, entre estos verificar si el solicitante es el titular o persona con legítimo interés, si cuenta con los poderes respectivos, si el signo distintivo a renovar se encuentra dentro del plazo, si se debe reclasificar la marca en función de sus productos y verificación de la tasa correspondiente. Luego, la creación de la carpeta del expediente en nuestra unidad de almacenamiento interna, y la foliación de los documentos. Una vez verificados los requisitos, se procede a emitir algún requerimiento o a generar la resolución para la posterior firma y notificación.

Finalmente, se procede a generar el asiento de renovación respectivo en el certificado que previamente debe ser escaneado y guardado en nuestra unidad interna de almacenamiento.

e) Procedimiento de modificaciones a registros

La modificación a registros es un procedimiento administrativo cuyo objeto es modificar la información respecto de la titularidad o situación de los signos

distintivos con posterioridad a la inscripción en los registros correspondientes, para publicitar derechos y generar protección frente a terceros.

El plazo legal máximo de este procedimiento es de ciento ochenta (180) días hábiles contados desde la presentación de la solicitud. No obstante, en la práctica, la Dirección demora, en promedio, entre 15 y 30 días hábiles para tramitar este procedimiento, en tanto haya sido presentado cumpliendo con todos los requisitos previstos por ley.

f) Procedimiento de visita inspectiva

La visita inspectiva es un procedimiento administrativo por medio del cual el titular de un signo distintivo, una patente, un diseño industrial o un esquema de trazado de circuitos integrados solicita la verificación de hechos presuntamente infractores, en el lugar donde se presume se produce su comisión, ya sea con la finalidad de recabar elementos probatorios que permitan acreditar la conducta infractora amputar (o imputada) y/o para ejecutar una medida cautelar dispuesta por la Autoridad. 14

El plazo legal de este procedimiento es de ciento ochenta (180) días hábiles contados desde la presentación de la solicitud. No obstante, en la práctica, la decisión de realizar una inspección se emite con gran celeridad, tratándose de hechos que ocurrirán en un momento específico (Ejemplo: un concierto a realizarse en una fecha determinada), o de situaciones que exigen una actuación célere para no generar sobrecostos al inspeccionado (Ejemplo: en almacenes aduaneros, en donde el transcurso del tiempo puede generar costos de sobreestadía).

g) Procedimiento de Medida Cautelar

La solicitud de medida cautelar es un procedimiento administrativo por el cual el titular de un signo distintivo, una patente, un diseño industrial o un esquema de trazado de circuitos integrados solicita evaluar el dictado de una medida capaz de asegurar el cumplimiento de una resolución final favorable.

El plazo legal máximo de este procedimiento es de ciento ochenta (180) días hábiles contados desde la presentación de la solicitud. No obstante, en la práctica, el dictado de una medida de esta naturaleza puede darse en el plazo de un día hábil incluso, tratándose de productos sujetos a importación, exportación o tránsito.

2. Análisis del contenido de la propuesta legislativa

El proyecto de ley materia del presente dictamen tiene por objeto modificar diversos artículos del Decreto Legislativo N° 1075, Decreto Legislativo que aprueba Disposiciones Complementarias a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial, a fin de simplificar el procedimiento de registro y renovación del registro de marca y, asimismo, eliminar exigencias costosas para el administrado. También se pretende reducir los plazos establecidos para las solicitudes de visita inspectiva y medida cautelar, con el objetivo de fortalecer y hacer más efectivos los mecanismos de protección marcaria frente a terceros.

CUADRO 01

LEY QUE MODIFICA EL DECRETO LEGISLATIVO 1075, DECRETO LEGISLATIVO QUE APRUEBA DISPOSICONES COMPLEMENTARIAS A LA DECISIÓN 486 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA QUE ESTABLECE EL REGIMEN COMÚN SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL; PARA SIMPLIFICAR EL REGISTRO, LA RENOVACIÓN Y LA PROTECCIÓN DE LAS MARCAS		
Decreto Legislativo 1075, Decreto Legislativo que prueba disposiciones complementarias a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial	**Proyecto de Ley 1375/2021-CR, que propone el proyecto de ley que simplifica el registro, la renovación y a protección de las marcas**	**Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial**
"Artículo 58. Registro multiclase *Cuando en una solicitud única se hayan incluido productos vio servicios que pertenezcan a más de una clase de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios de Niza, dicha solicitud dará por resultado un único registro.* *El titular de un signo registrado que distingue productos o servicios específicos, podrá obtener un nuevo registro para el mismo signo, a condición que éste distinga productos o servicios no cubiertos en el registro original. La nueva solicitud de registro se tramitará en forma independiente, siguiéndose los procedimientos que el presente Decreto Legislativo señala para el trámite de registro.*	*"Artículo 58. Registro multiclase* *Cuando en una solicitud única se hayan incluido productos vio servicios que pertenezcan a más de una clase de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios de Niza, dicha solicitud dará por resultado un único registro.* *El titular de un signo registrado que distingue productos o servicios específicos, podrá obtener un nuevo registro para el mismo signo, a condición que éste distinga productos o servicios no cubiertos en el registro original. La nueva solicitud de registro se tramitará en forma independiente, siguiéndose los procedimientos que el presente Decreto Legislativo señala para el trámite de registro.* ***El monto de la tasa por el concepto del registro de hasta tres (3) clases de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios de Niza constituirá un pago único, el cual no podrá ser superior al 12% de la UIT vigente, siempre que las tres (3) clases se encuentren vinculadas o tengan conexión competitiva.***	**Artículo 138**.- La solicitud de registro de una marca se presentará ante la oficina nacional competente **y deberá comprender una sola clase de productos o servicios y cumplir con los siguientes requisitos**: a) el petitorio (...) f) de ser el caso, el certificado de registro en el país de origen expedido por la autoridad que lo otorgó y, de estar previsto en la legislación interna, del comprobante de pago de la tasa establecida, cuando el solicitante deseara prevalerse del derecho previsto en el Artículo quinquies del Convenio de París. **Artículo 139.-** El petitorio de la solicitud de registro de marca estará contenido en un formulario y comprenderá lo siguiente (...) f) la indicación expresa de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro de la marca; **g) la indicación de la clase a la cual corresponden los productos o servicios (...)** * Modificado por la Decisión 689° **Artículo 151**.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes. **Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente**. .....
Artículo 61-A.- Presentación de solicitud de renovación del registro *La solicitud de renovación del registro, por el titular o quien tuviera legítimo interés debe presentarse ante la Dirección competente, cumpliendo con los requisitos establecidos en los artículos 50 y 51, en lo que corresponda.*	***Artículo 61-A.- Presentación de solicitud de renovación del registro*** *La solicitud de renovación del registro, por el titular o quien tuviera legítimo interés debe presentarse ante la Dirección competente, cumpliendo con los requisitos establecidos en los artículos 50 y 51, en lo que corresponda.* ***Si del examen resulta que la solicitud de renovación del registro no posee observaciones o irregularidades, el procedimiento tendrá un plazo máximo de diez (10) días hábiles desde la fecha de presentación de la solicitud, sujeto a silencio administrativo positivo.***	**Artículo 152.-** El registro de una marca tendrá una duración de diez años contados a partir de la fecha de su concesión y podrá renovarse por períodos sucesivos de diez años. **Artículo 153.-** El titular del registro, o quien tuviere legítimo interés, deberá solicitar la renovación del registro ante la oficina nacional competente, dentro de los seis meses anteriores a la expiración del registro. No obstante, tanto el titular del registro como quien tuviere legítimo interés gozarán de un plazo de gracia de seis meses, contados a partir de la fecha de vencimiento del registro, para solicitar su renovación. A tal efecto acompañará los comprobantes de pago de las tasas establecidas, pagando conjuntamente el recargo correspondiente si así lo permiten las normas internas de los Países Miembros. Durante el plazo referido, el registro de marca mantendrá su plena vigencia. **A efectos de la renovación no**

		se exigirá prueba de uso de la marca y se renovará de manera automática, en los mismos términos del registro original. Sin embargo, el titular podrá reducir o limitar los productos o servicios indicados en el registro original. **Artículo 174.-** El registro de la marca caducará de pleno derecho si el titular o quien tuviera legítimo interés no solicita la renovación dentro del término legal, incluido el período de gracia, de No hay contravención acuerdo con lo establecido en la presente Decisión. Asimismo, será causal de caducidad la falta de pago de las tasas, en los términos que determine la legislación nacional del País Miembro. ……
Artículo 61-B. Subsanación de irregularidades de solicitud de renovación del registro *Si del examen resulta que la solicitud de renovación del registro, no cumple con los requisitos formales establecidos en el presente Decreto Legislativo, la Dirección competente notifica al solicitante para que, en un plazo de treinta (30) días hábiles siguientes a su notificación, subsane las irregularidades. Si a la expiración del plazo señalado, no se han subsanado las irregularidades, la solicitud se considera abandonada, poniéndose fin al procedimiento.* *Tratándose del pago de la tasa, se otorga un plazo de dos (02) días hábiles. Si a la expiración del plazo señalado, no se ha cumplido con acreditar el pago respectivo, la solicitud se tiene por no presentada.*	***Artículo 61-B. Subsanación de irregularidades de solicitud de renovación del registro*** *Si del examen resulta que la solicitud de renovación del registro, no cumple con los requisitos formales establecidos en el presente Decreto Legislativo, la Dirección competente notifica al solicitante para que, en un plazo de treinta (30) días hábiles siguientes a su notificación, subsane las irregularidades. Si a la expiración del plazo señalado, no se han subsanado las irregularidades, la solicitud se considera abandonada, poniéndose fin al procedimiento.* *Tratándose del pago de la tasa, se otorga un plazo de dos (02) días hábiles. Si a la expiración del plazo señalado, no se ha cumplido con acreditar el pago respectivo, la solicitud se tiene por no presentada.* ***Cuando se deba subsanar irregularidades, el plazo máximo del procedimiento de renovación del registro a cargo de la entidad competente no podrá superar los cuarenta (40) días hábiles desde la fecha de presentación de la solicitud.***	**Artículo 174.-** El registro de la marca caducará de pleno derecho si el titular o quien tuviera legítimo interés no solicita la renovación dentro del término legal, incluido el período de gracia, de acuerdo con lo establecido en la presente Decisión. Asimismo, será causal de caducidad la falta de pago de las tasas, en los términos que determine la legislación nacional del País Miembro. ……
Artículo 64. Solicitud de inscripción de modificaciones *La solicitud de inscripción de modificaciones y otros actos que afecten al registro deberá presentarse ante la Dirección competente, cumpliendo con los requisitos establecidos en los artículos 50 y 51 de este Decreto Legislativo, y con las formalidades establecidas en el artículo 14 del presente Decreto Legislativo, en lo que corresponda.* *No procede presentar oposición contra las solicitudes de inscripción de modificaciones y otros actos que afecten el registro, sin perjuicio de las acciones legales que pudieran corresponder.*	***Artículo 64. Solicitud de inscripción de modificaciones*** *La solicitud de inscripción de modificaciones y otros actos que afecten al registro deberá presentarse ante la Dirección competente, cumpliendo con los requisitos establecidos en los artículos 50 y 51 de este Decreto Legislativo, y con las formalidades establecidas en el artículo 14 del presente Decreto Legislativo, en lo que corresponda.* ***El procedimiento de modificación tendrá un plazo máximo de diez (10) días hábiles desde la fecha de presentación de la solicitud, sujeto a silencio administrativo positivo.*** *No procede presentar oposición contra las solicitudes de inscripción de modificaciones y otros actos que afecten el registro, sin perjuicio de las acciones legales que pudieran corresponder.*	**Artículo 155.-** El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: (...) **suprimir o modificar la marca con fines comerciales,** después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos. ……

Artículo 99. Procedimiento a solicitud de parte [...]	***Artículo 99. Procedimiento a solicitud de parte*** *[..]* ***99.3 Para el procedimiento de solicitud de visita inspectiva, el plazo máximo establecido no deberá superar los diez (10) días hábiles, desde la fecha de presentación de la solicitud."***	**Artículo 251.-** A efectos de fundamentar sus reclamaciones, la autoridad nacional competente permitirá al titular de la marca participar en la inspección de las mercancías retenidas. Igual derecho corresponderá al importador o exportador de las mercancías. Al realizar la inspección, la autoridad nacional competente dispondrá lo necesario para proteger la información confidencial, en lo que fuese pertinente. .....
Artículo 112. Solicitud y modificación de las medidas cautelares *Las solicitudes de medidas cautelares se presentan por el titular del derecho respectivo y deben cumplir con los mismos requisitos previstos en el artículo 99 del presente Decreto Legislativo en lo que corresponda. De no cumplir con tales requisitos, se notifica al solicitante para que subsane las omisiones en las que se hubiera incurrido en el plazo de dos (02) días hábiles, bajo apercibimiento de tenerse por no presentada la solicitud.* *Las medidas cautelares pueden ser modificadas o levantadas durante el curso del procedimiento, de oficio o a instancia de parte".*	***Artículo 112. Solicitud y modificación de las medidas cautelares*** *Las solicitudes de medidas cautelares se presentan por el titular del derecho respectivo y deben cumplir con los mismos requisitos previstos en el artículo 99 del presente Decreto Legislativo en lo que corresponda. De no cumplir con tales requisitos, se notifica al solicitante para que subsane las omisiones en las que se hubiera incurrido en el plazo de dos (02) días hábiles, bajo apercibimiento de tenerse por no presentada la solicitud.* ***Las medidas cautelares deberán ser concedidas o rechazadas en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles desde la fecha de presentación de la solicitud.*** *Las medidas cautelares pueden ser modificadas o levantadas durante el curso del procedimiento, de oficio o a instancia de parte".* **DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL** ***ÚNICA. Adecuación*** *El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) deberá adecuar su Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) en un plazo no mayor de sesenta (60) días hábiles desde la fecha siguiente de publicación de la presente ley.* *Los procedimientos a cargo de los órganos competentes del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) que, a la fecha se encuentren en trámite, continúan siendo tramitados bajo las normas anteriores a la vigencia de esta ley.*	**Artículo 245.-** Quien inicie o vaya a iniciar una acción por infracción podrá pedir a la autoridad nacional competente que ordene medidas cautelares inmediatas con el objeto de impedir la comisión de la infracción, evitar sus consecuencias, obtener o conservar pruebas, o asegurar la efectividad de la acción o el resarcimiento de los daños y perjuicios. Las medidas cautelares podrán pedirse antes de iniciar la acción, conjuntamente con ella o con posterioridad a su inicio. **Artículo 247.-** Una medida cautelar sólo se ordenará cuando quien la pida acredite su legitimación para actuar, la existencia del derecho infringido y presente pruebas que permitan presumir razonablemente la comisión de la infracción o su inminencia. La autoridad nacional competente podrá requerir que quien pida la medida otorgue caución o garantía suficientes antes de ordenarla. Quien pida una No hay contravención medida cautelar respecto de productos determinados deberá suministrar las informaciones necesarias y una descripción suficientemente detallada y precisa para que los productos presuntamente infractores puedan ser identificados. **Artículo 249.-** Las medidas cautelares se aplicarán sobre los productos resultantes de la presunta infracción y de los materiales o medios que sirvieran principalmente para cometerla.[3]

[3] El resumen texto de la 3era columna de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial, fue adquirido de la opinión del Centro de Estudios en Propiedad Intelectual (CEPI), enviada mediante carta s/n de fecha 31.03.2022.

En cuanto al texto dispositivo que se propone modificar, cabe indicar que, en nuestro país, es posible realizar modificaciones a la normativa vigente sobre Propiedad Industrial, siempre que la norma nacional sea siempre compatible con la Normativa Comunitaria Andina, entendiéndose que toda norma nacional que la pueda distorsionar o sea contraria a sus disposiciones no es aplicable. Asimismo, el artículo 276°[4] de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina autoriza a los países miembros implementar normativas internas sobre Propiedad Industrial que no estén comprendidas en la mencionada Decisión, sin embargo, siempre sobre la base de lo señalado anteriormente, es decir, siempre que la norma nacional no sea contraria ni distorsione la norma comunitaria.

3. Análisis sobre la necesidad, viabilidad y oportunidad de la propuesta legislativa

1) Control del cumplimiento de las exigencias establecidas en los artículos 75 y 76

Conforme a lo establecido en los artículos 75 y 76 del Reglamento del Congreso de la República, se ha verificado que el Proyecto de Ley 1375/2021-CR cumple con las exigencias señaladas en los mencionados artículos: i) la exposición de motivos contiene los fundamentos de la propuesta legislativa, ii) los efectos de la vigencia de la norma que se propone sobre el ordenamiento jurídico; y, iii) así como el análisis costo beneficio.

2) Relación de la iniciativa con la Agenda Legislativa 2021-2022 y con el Acuerdo Nacional

El Congreso de la República aprobó la Agenda Legislativa para el Periodo Anual de Sesiones 2021-2022, en cumplimiento de segundo párrafo del artículo 29 del Reglamento del Congreso de la República que establece que, al inicio del periodo anual de sesiones, los grupos parlamentarios presentan una propuesta detallando los temas o proyectos de ley que consideren necesario debatir y aprobar durante dicho periodo.

La Agenda Legislativa es un instrumento concertado de planificación del trabajo parlamentario en materia legislativa y que el debate del os proyectos de ley allí contenidos tiene prioridad, tanto en las comisiones como en el Pleno del Congreso.

La Agenda Legislativa para el Periodo Anual de Sesiones 2021-2022, tiene relación directa con las Políticas de Estado del Acuerdo Nacional, el mismo que establece como Tercer Objetivo la competitividad del país, y es bajo la Política de Estado N° 17 de la afirmación de la economía social de mercado que la Agenda Legislativa 2021-2022 ha establecido que deben priorizarse los proyectos de ley que contengan medidas a favor de los consumidores.

La presente propuesta legislativa se enmarca en las siguientes políticas de Estado del Acuerdo Nacional: Decima Octava Política del Estado, búsqueda de la competitividad, productividad y formalización de la actividad económica. Con la Vigésima Política del Estado, desarrollo de la ciencia y tecnología y

[4] – Artículo 276.- Los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la presente Decisión, serán regulados por las normas internas de los Países Miembros.

con la Vigésima Cuarta Política del Estado, que se enmarca en la afirmación de un Estado eficiente y transparente.

4. Análisis del marco normativo y efecto de la vigencia de la norma

1) Análisis del marco normativo

La Constitución Política del Perú, establece en el artículo 65. El Estado defiende el interés de los consumidores y usuarios. [...] Asimismo, el artículo 2. Toda persona tiene derecho, numeral 8. A la libertad de creación intelectual, artística, técnica y científica, así como a la propiedad sobre dichas creaciones y a su producto. El Estado propicia el acceso a la cultura y fomenta su desarrollo y difusión; y establece el artículo 59. El Estado estimula la creación de riqueza y garantiza la libertad de trabajo y la libertad de empresa, comercio e industria. [...]

En la misma medida constitucional, es importante mencionar que, para el estudio del presente dictamen, establece el artículo 55. Los tratados celebrados por el Estado en vigor forman parte del derecho nacional.

La Comisión de la Comunidad Andina estableció el Régimen Común sobre Propiedad Industrial, en la Decisión 486[5], el cual es de obligatorio cumplimiento para los Países Miembro de la Comunidad Andina, los cuales a su vez son contratantes del Convenio de París.

El Decreto Legislativo 1075, Decreto Legislativo que aprueba disposiciones complementarias a la Decisión 486, de la Comisión de la Comunidad Andina que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial; entonces este mandato tiene como objeto regular aspectos complementarios en la Decisión 486 que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial, de conformidad con la Constitución Política del Perú y los acuerdos y tratados internacionales suscritos sobre la materia.

2) Efecto de vigencia de la norma

Luego del análisis del presente texto dispositivo, la ley propone la modificación de los artículos 58, 61-A, 61-B, 64, 99 y 112 del Decreto Legislativo 1075, Decreto Legislativo que aprueba Disposiciones Complementarias a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial. Es importante mencionar, que las modificaciones que se proponen se dan en estricto cumplimiento respeto de lo dispuesto en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial y en los tratados y convenios internacionales de la materia.

Asimismo, la propuesta legislativa fortalece la aplicación constitucional de los artículos 2.8 y 59 de la Constitución Política del Perú y de los artículos 2 y 8 del Decreto Legislativo 757, Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada.

V. Análisis de las opiniones e información solicitadas

[5] En nuestro caso específico, la República del Perú es País Miembro de la Comunidad Andina y se adhirió al Convenio de París el 11 de enero de 1995 (en vigor desde el 11 de abril de 1995) y al Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) el 1 de enero de 1995.

a) **Opiniones solicitadas**:

1) Oficio P.O. 186-2021-2022-CODECO/CR, de fecha 04 de marzo de 2022, dirigido al Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi).

2) Oficio P.O. 187-2021-2022-CODECO/CR, de fecha 04 de marzo de 2022, dirigido al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos – MINJUS.

3) Oficio P.O. 188-2021-2022-CODECO/CR, de fecha 04 de marzo de 2022, dirigido al Cámara de Comercio de Lima – CCL.

4) Oficio P.O. 189-2021-2022-CODECO/CR, de fecha 04 de marzo de 2022, dirigido al señor Alfredo Lindley.

5) Oficio P.O. 190-2021-2022-COECO/CR, de fecha 04 de marzo de 2022, dirigido al señor Alex Sosa.

6) Oficio P.P. 191-2021-2022-CODECO/CR, de fecha 04 de marzo de 2022, dirigido al CONACUP.

b) **Opiniones recibidas**:

1) **La Cámara de Comercio de Lima (CCL)** mediante P/ 037.03.2022/GL, de fecha 8 de marzo de 2022, suscrito por el señor **Peter Anders Moores**, por el cual señala que las propuestas que contiene la iniciativa legislativa materia de análisis son razonables.

2) **El especialista señor Alfredo Lindley Russo** mediante la carta s/n de fecha 24 de marzo de 2022, remitió opinión técnica favorable y refirió propuestas, observaciones y comentarios al proyecto de ley materia de análisis.

3) **El Centro de Estudios en Propiedad Intelectual (CEPI)** mediante carta s/n de fecha 31.03.2022, suscrito por su presidente el doctor **Alex Sosa Huapaya**, expresa que la iniciativa legislativa es compatible con la normatividad comunitaria que regula la materia y considera en cuanto a los costos de transacción realizar un análisis profundo.

4) **El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi)** mediante Informe 000004-2022-DSD/INDECOPI de fecha 4 de abril de 2022 del Director de Signos Distintivos, Director de Invenciones y Nuevas Tecnologías y del Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica del Indecopi, remiten opinión técnica con observaciones y propuestas al texto del proyecto de ley materia de análisis.

c) **Análisis de las opiniones recibidas**

1) **La Cámara de Comercio de Lima (CCL)** refiere que la primera intención encontramos que las propuestas son razonables, en la medida que tienden a simplificar y reducir el costo de los procedimientos para el registro, renovación y protección de marcas, lo cual redundaría en beneficio de los administrados; sin embargo, estimamos necesario se analice si estas medidas pudieran de algún modo afectar la calidad de la evaluación que hace el INDECOPI respecto de

estos trámites y originen debilitamiento en el sistema de registro, que a la larga lo perjudiquen. En ese sentido, consideramos importante conocer previamente la posición técnica del INDECOPI a estas propuestas modificatorias, a fin de emitir mejor opinión sobre el Proyecto de Ley 1375/2021-CR.

2) **El señor Alfredo Lindley en su opinión técnica sobre el contenido del proyecto de ley señala lo siguiente:**

1. *Un solo derecho de trámite para registrar la marca en tres clases:* ***Propuesta de incorporación de párrafo al Artículo 58° del DL1075***

Opinión 1:

La reducción de la tasa de registro debe tener un correlato con la reducción de la tasa para la cancelación del registro.

Sustento: *Nuestro sistema jurídico marcario se rige por el principio de inscripción registral. Esto significa que la protección de la marca nace desde su registro. Existe pues, un fuerte incentivo para que los agentes económicos registren signos que, tal vez, nunca sean utilizados. Por ejemplo, aquellos signos cuyo registro persigue una vocación defensiva, vale decir, que no se registra con el ánimo de ser usada, sino para impedir que un tercero la inscriba en una clase diferente para distinguir productos o servicios vinculados. Conforme la tasa de registro disminuye, se incrementa el incentivo para el registro de marcas cuya intención de uso es incierta.*

Asimismo, algunos signos inscritos con la sana intención de comercializar productos/servicios caen en desuso por representar un fracaso comercial, por ser reemplazadas en el mercado por nuevas versiones de marcas; o, porque solo fueron protegidas para situaciones efímeras[6]*.*

La cancelación por falta de uso es el remedio para todas estas situaciones que sabotean el objetivo de consolidar la distintividad del signo a partir de su uso real y efectivo en el mercado. Sin embargo, supone la tramitación de un procedimiento administrativo contencioso entre el titular de la marca cuya cancelación se pretende y el interesado en utilizar el signo en desuso. Este mecanismo es saludable para el sistema marcario, tal como ha sido desarrollado por el tratadista español en Derecho de Marcas, el profesor Carlos Fernández-Novoa[7]*.*

No obstante, para que el sistema funcione en forma adecuada, es indispensable que el titular de la marca en desuso pierda el derecho sobre todos los signos inscritos a su favor para distinguir los mismos productos o similares. De otro modo, el verdadero interesado en utilizar la marca no podrá acceder al registro, debido a que siempre encontrará un obstáculo que se lo impida: alguna de las marcas no canceladas.
En la actualidad, quien solicita la cancelación de una marca multiclase debe pagar una tasa por cada una de las clases en las cuales fue registrada la marca.

---

[6] Por ejemplo, las promociones –temporales por definición– cuyo nombre es registrado como marca

[7] Ver: Fernández-Novoa, C. (2001). Tratado sobre Derecho de Marcas. Marcial Pons Editores, 2da Edición (2004) pp. 453-634.

Por lo tanto, disminuir el costo de acceder al registro permite a los agentes económicos elevar las barreras de acceso al mercado, pues a falta de uso del signo, el interesado en la cancelación deberá solicitar una mayor cantidad de cancelaciones, teniendo que pagar tres (3) tasas (una por cada clase en la que el signo está inscrito), cuando quien la registró solo tuvo que pagar una (1) sola.

OPINIÓN 2:

Los criterios de vinculación entre productos o servicios deben ser transparentados.

Sustento: *Si el Proyecto está considerando que para el registro de una marca se podrá pagar una sola tasa "siempre que las tres (3) clases se encuentren vinculadas o tengan conexión competitiva" (sic)[8] es fundamental que los criterios de vinculación entre productos o servicios adoptados por la autoridad marcaria sean publicitados.*

De ese modo, se observaría el principio de predictibilidad, consagrado en el Numeral 1.15) del Artículo IV del Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUOLPAG), y en virtud del cual "[l]autoridad administrativa brinda a los administrados o sus representantes información veraz, completa y confiable sobre cada procedimiento a su cargo, de modo tal que, en todo momento, el administrado pueda tener una comprensión cierta sobre los requisitos, trámites, duración estimada y resultados posibles que se podrían obtener."

OPINIÓN 3:

Se deben establecer tasas diferenciadas para las micro y pequeñas empresas (mypes).

Sustento: *En nuestra experiencia, hemos detectado cuatro (4) motivos principales por los cuales un agente económico solicita el registro de una marca:*

- *Porque quiere asegurar su inversión desde el inicio de sus operaciones. Esta es la conducta óptima, pero la menos usual. Las nuevas empresas (usualmente mypes) no están dispuestas a invertir en intangibles o en aspectos que en apariencia no reditúen valor inmediato. Es debido a la falta de liquidez inicial de las mypes que su prioridad de inversión no incluye el registro de una marca.*
- *Porque luego de usar la marca sin registro por algún tiempo, el signo se empieza a consolidar en el mercado y se detecta la conveniencia de inscribirla para proteger su inversión.*
- *Porque ya tuvo una experiencia en la cual, al no haber registrado su marca en forma oportuna, un tercero la utilizó sin su autorización o, peor aún, la inscribió a su nombre. Esta circunstancia importa que la empresa afectada (usualmente mype) haya tenido que destinar recursos en la defensa legal del signo usado o inscrito por el tercero no autorizado, lo que representa una pérdida económica para la empresa.*
- *Porque ya superó su etapa inicial de operaciones, en la que su actividad era informal o incluso hacía uso no autorizado de signos ajenos (piratería); y ahora*

[8] Entendemos que el texto se refiere a la vinculación o conexión competitiva de los productos o servicios (no de las clases)

está dispuesto a invertir en un negocio sostenible en el largo plazo. En este caso, la marca se constituye como un instrumento de formalización

Nótese la relevancia de facilitar el acceso al registro de una marca por las mypes, lo cual es posible si la inversión en dicho registro no impacta en la liquidez de la empresa.

Esto nos lleva a considerar una reducción de las tasas para el registro de marcas por parte de las mypes, lo cual importa analizar la viabilidad legal de dicha propuesta, conforme se procede a continuación.

Si bien el Numeral 54.2) del Artículo 54° del TUOLPAG prohíbe "establecer pagos diferenciados para dar preferencia o tratamiento especial a una solicitud distinguiéndola de las demás de su mismo tipo, ni discriminar en función al tipo de administrado que siga el procedimiento", dicha regla podría modificarse por otra norma con rango de ley, por ejemplo, la que se pretende emitir con el Proyecto.

Al respecto, si bien el Numeral 2) del Artículo II del Título Preliminar del TUOLPAG precisa que las "leyes que crean y regulan los procedimientos especiales no podrán imponer condiciones menos favorables a los administrados que las previstas en la presente Ley", somos de la opinión que esta regla podría encontrar una excepción, siempre y cuando:

a) Sea establecida de manera expresa (no tácita) por norma con rango de ley o superior; y,
b) cuente con soporte constitucional que amerite dicha excepción.

En lo que concierne a las tasas preferenciales para las mypes, cuando el Artículo 59° de la Constitución Política del Perú define el rol del Estado en la economía, precisa que el Estado debe "brinda(r) oportunidades de superación a los sectores que sufren cualquier desigualdad; en tal sentido, promueve las pequeñas empresas en todas sus modalidades". Esta disposición constitucional sería el sustento que habilitaría al legislador a establecer un supuesto de excepción al Numeral 2) del Artículo II del Título Preliminar del TUOLPAG, consistente en el cobro de tasas preferenciales para los procedimientos administrativos solicitados por las mypes, siempre y cuando ello no involucre un subsidio cruzado a cargo de las demás empresas.

2. *Simplificación de procedimientos mediante la eliminación de requisitos:*
   - ***Propuesta de incorporación de párrafo al Artículo 61-A° del DL1075***
   - ***Propuesta de incorporación de párrafo al Artículo 64° del DL1075***

Estas propuestas buscan modificar los Artículos 61-A° y 64° del DL1075, sin evaluar la pertinencia de mantener vigente la exigencia de presentar, siempre y en todos los casos, los requisitos establecidos en los Artículos 50° y 51° del DL1075.

A nuestro criterio, sin perjuicio de las modificaciones propuestas, a fin de agilizar el análisis de la solicitud de renovación y de modificación de registro, debe modificarse el primer párrafo del Artículo 61-A° y el primer párrafo del Artículo 64°, de modo tal que se alineen a lo dispuesto en el Artículo 48° del TUOLPAG y observar así el principio de simplicidad.

Sustento: *Una renovación o modificación de registro implica la existencia de un registro primigenio en el que se presentó documentación. En el caso del registro de marcas, dicha documentación se especifica en los Artículos 50° y 51° del DL1075:*

El Numeral 1.13) del Artículo IV del Título Preliminar del TUOLPAG, consagra el principio de simplicidad en virtud del cual "los trámites establecidos por la autoridad administrativa deberán ser sencillos, debiendo eliminarse toda complejidad innecesaria; es decir, los requisitos exigidos deberán ser racionales y proporcionales a los fines que se persigue cumplir". Con mayor precisión, el Numeral 48.1.1) del Artículo 48° del TUOLPAG, le prohíbe a la autoridad administrativa solicitar aquella documentación "que la entidad solicitante genere o posea como producto del ejercicio de sus funciones públicas conferidas por la Ley o que deba poseer en virtud de algún trámite realizado anteriormente por el administrado en cualquiera de sus dependencias (...) siempre que los datos no hubieren sufrido variación".

De ese modo, en el procedimiento de renovación o de modificación no se debería exigir la presentación de los documentos presentados en el procedimiento de registro (o la última renovación), si es que estos no han sufrido variaciones.

En consecuencia, en lugar de establecer la obligación de cumplir los "requisitos establecidos en los artículos 50 y 51", debe precisarse que solo son exigibles los "requisitos establecidos en los artículos 50 y 51 ***que no hayan sufrido variación desde el trámite procedimiento de registro o de renovación previo"***

3. *Simplificación de procedimientos por reducción de los plazos:*
   - ***Propuesta de incorporación de párrafo al Artículo 61-A° del DL1075***
   - ***Propuesta de incorporación de párrafo al Artículo 61-B° del DL1075***
   - ***Propuesta de incorporación de párrafo al Artículo 64° del DL1075***
   - ***Propuesta de incorporación del Numeral 99.3) al Artículo 99° del DL1075***
   - ***Propuesta de incorporación de párrafo al Artículo 112° del DL1075***

Estas propuestas modificatorias se orientan a reducir los plazos de los procedimientos. No obstante, consideramos que es posible intensificar dicha reducción puesto que los plazos vigentes (y los propuestos) pueden ser considerados excesivos.

Sustento:
El principio del debido procedimiento establecido en el Numeral 1.2) del Artículo IV del Título Preliminar del TUOLPAG

a. *Propuesta de incorporación de párrafo al Artículo 61-A° del DL1075 (RENOVACIÓN)*

Un procedimiento de renovación de registro que virtualmente no requiera evaluar documento alguno, salvo aquellos contenidos en los Artículos 50° y 51° que no hayan sufrido variación desde el trámite procedimiento de registro o de renovación previo; es bastante sencillo e incluso automatizable con el tiempo (y a eso deben apuntar los procedimientos de registro de marcas).

Por ello, consideramos que este procedimiento bien podría ser tramitado y resuelto en un plazo no mayor a diez (10) días hábiles, salvo que existan

observaciones o requerimientos a cargo del solicitante, en cuyo caso el plazo quedaría suspendido hasta la correspondiente absolución.

b. *Propuesta de incorporación de párrafo al Artículo 61-B° del DL1075 (SUBSANACIÓN)*

Los administrados deben ser responsables de presentar documentación completa al inicio de cada procedimiento. En el caso de las renovaciones, la documentación a presentar debería ser relativamente sencilla si se considera que no es exigible presentar documentos que no hayan sufrido variación desde el trámite procedimiento de registro o de renovación previo.

El Artículo 136° del TUOLPAG establece que las subsanaciones deben realizarse dentro de un plazo máximo de dos (2) días hábiles.

Esta regla ha sido observada en el Proyecto para el caso de la subsanación del pago de la tasa. No obstante,se fija una regla distinta para subsanación de los requisitos, sugiriendo un plazo de treinta (30) días.

A nuestro criterio, todos estos plazos deberían ser de entre dos (2) y cinco (5) días hábiles, de modo tal que los procedimientos en giro que se encuentran pendientes de subsanación sean los menos posible. Así, se estaría contribuyendo con la descongestión de procedimientos en giro en el Indecopi (descarga procedimental).

3. **El Centro de Estudios en Propiedad Intelectual (CEPI)** mediante la opinión técnica señala lo siguiente:

a. ***Respecto de la modificación del art. 58°.*** *Sobre el pago de una única tasa por el concepto de 3 clases diferentes de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios Niza, la Decisión 689°, la cual adecua determinados artículos de la Decisión 486° con el objetivo de permitir un desarrollo y profundización de Derechos de Propiedad Intelectual en la legislación interna de cada país, en su artículo 1°[9] modifica el artículo 138° de la Decisión 486° permitiendo el registro de marcas multiclase con la finalidad "garantizar la aplicación de un régimen común y preservar el ordenamiento jurídico entre las relaciones de los Países Miembros de la Comunidad Andina"(...). Al respecto, se puede advertir que la modificación del artículo 58° es completamente compatible con la Normativa Comunitaria que regula la materia, debido a que en dicha normativa no se establece la obligación de tasas individuales respecto de cada una de las clases que se pretende registrar, para un mismo signo, ante la autoridad competente. (Anexo 1)*

b. ***Respecto de la modificación del art. 61°-A.*** *Sobre para el procedimiento de renovación y la fijación de un plazo máximo de 10 días hábiles para resolver, sujeto a silencio administrativo positivo, la Decisión 486° en su artículo 153°[10]*

---

[9] Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - Artículo 1.- Los Países Miembros, a través de su normativa interna, estarán facultados, en los términos que se indican expresamente en los literales de a) a j), para desarrollar y profundizar únicamente las siguientes disposiciones de la Decisión 486: (...) f) Artículo 138: Permitir el establecimiento de un registro multiclase de marcas.

[10] Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - Artículo 153.- El titular del registro, o quien tuviere legítimo interés, deberá solicitar la renovación del registro ante la oficina nacional competente, dentro de los seis meses anteriores

desarrolla los lineamientos generales del procedimiento de renovación señalando que no se exigirá prueba de uso de marca y la misma debe ser renovada de manera automática, siempre que la solicitud no posea observaciones o irregularidades. En ese sentido, de un análisis integral se puede advertir que la modificación al artículo 61°-A es completamente compatible con la Normativa Comunitaria que regula la materia, puesto a que la misma no determina un plazo mínimo para la expedición del certificado de renovación. (Anexo 1).

c. ***Respecto de la modificación del art. 61°-B**, sobre el procedimiento de subsanación de irregularidades de solicitud de renovación del registro y la fijación de un plazo máximo de 40 días hábiles como plazo máximo para que la autoridad competente resuelva, la Decisión 486° en su artículo 153° señala que tanto el titular del registro como quien tuviere legítimo interés gozarán un plazo de gracia de 6 meses para solicitar la renovación de su marca. Luego de presentada la solicitud, esta mantendrá su vigencia hasta que la entidad correspondiente expida su renovación por 10 años adicionales. En ese sentido, de un análisis integral se puede advertir que la modificación al artículo 61°-B es compatible con la Normativa Comunitaria que regula la materia. (Anexo 1).*

d. ***Respecto de la modificación del art. 64°** Sobre el procedimiento de modificación y la fijación de un plazo máximo de 10 días hábiles sujeto a silencio administrativo positivo. Al respecto, la Decisión 486° no hace mención respecto de un plazo mínimo para el procedimiento de modificación por lo que nos remitiremos al artículo 276° de la Decisión 486°, que autoriza a los países miembros implementar normativas internas sobre Propiedad Industrial que no estén comprendidas en la mencionada Decisión. En ese sentido, se puede advertir que la modificación al artículo 64° es completamente compatible con la Normativa Comunitaria que regula la materia, debido a que mediante esta no se establece un plazo mínimo para el procedimiento de modificación de una marca. (Anexo 1).*

e. ***Respecto de la modificación del art. 99°** Sobre el procedimiento de solicitud de visita inspectiva y la fijación de un plazo máximo de 10 días hábiles desde la fecha de presentación de la solicitud, cabe precisar que la Decisión 486° no hace mención alguna sobre un plazo mínimo para la realización de visitas inspectivas, por lo que nos remitiremos al artículo 276° de la Decisión 486°, mediante la cual se autoriza a los países miembros a implementar normativas internas sobre Propiedad Industrial que no estén comprendidas en la mencionada Decisión, siempre que estas sean compatibles. En ese sentido, de un análisis integral se puede advertir que la modificación al artículo 99° es completamente compatible con la Normativa Comunitaria que regula la materia. (Anexo 1).*

f. ***Respecto de la modificación del art. 112°** Sobre las medidas cautelares y un plazo máximo de 15 días hábiles otorgado a la autoridad competente para*

---

a la expiración del registro. No obstante, tanto el titular del registro como quien tuviere legítimo interés gozarán de un plazo de gracia de seis meses, contados a partir de la fecha de vencimiento del registro, para solicitar su renovación. A tal efecto acompañará los comprobantes de pago de las tasas establecidas, pagando conjuntamente el recargo correspondiente si así lo permiten las normas internas de los Países Miembros. Durante el plazo referido, el registro de marca mantendrá su plena vigencia. A efectos de la renovación no se exigirá prueba de uso de la marca y se renovará de manera automática, en los mismos términos del registro original. Sin embargo, el titular podrá reducir o limitar los productos o servicios indicados en el registro original

conceder o rechazar las mismas, la Decisión 486° en su artículo 245°[11] establece que, el administrado que presente o pretenda presentar una acción por infracción podrá solicitar a la autoridad nacional competente que ordene de manera inmediata las medidas cautelares correspondientes con el objeto de impedir la comisión de la infracción. En ese sentido, de un análisis integral, se puede advertir que es completamente compatible con la Normativa Comunitaria que regula la materia, pues mediante esta modificación se pretende cumplir con el objetivo de expedir medidas cautelares en el menor tiempo posible, a favor del administrado, con el fin de evitar una posible comisión de infracción. (Anexo 1).

En ese sentido, se evidencia que la propuesta legislativa no contraviene las disposiciones establecidas en la Decisión 486°, con lo cual se procederá a analizar si la fundamentación técnica cumple con el objeto del presente proyecto.

ANALISIS ECONOMICO DEL PROYECTO (COSTO- BENEFICIO)

Es importante señalar que el objeto del presente proyecto es modificar los artículos 58°, 61-A°, 61-B°, 64°, 99° y 112° del Decreto Legislativo N°1075, con la finalidad de simplificar los procedimientos administrativos en las materias correspondientes, por lo que procedemos a analizar si los costos de la modificación producirían mayores beneficios a los administrados. Sobre el particular, simplificar los procedimientos de manera clara permite que la supervisión y la resolución de estos sea menos costosa. Sin embargo, este proceso de simplificación podría generar costos elevados ya que, al buscar que la normativa se vuelva clara y sencilla de ejecutar, implicaría una inversión elevada en mecanismos que permitan que las mismas sean eficientes. Es por ello que, a continuación, detallaremos algunas de los cuestionamientos que advertimos de la lectura de la propuesta legislativa, con el objeto de que puedan ser analizadas con mayor profundidad:

a. ***Respecto de la modificación del art. 58°.*** *Sobre este punto, si bien consideramos que esta modificación podría abaratar costos de registro - respecto de un único pago para el registro de hasta 3 diferentes clases- lo cierto es que, se podría generar un incremento de costos tanto para la entidad como para el administrado. En efecto, la modificación propuesta puede incrementar los costos de búsqueda de información de parte del administrado, pues no solo tendrá que conocer a qué clase de productos o servicios distinguirá su marca, sino que además deberá tener información sobre la conexión competitiva que deben tener las 3 clases en las que la quiera incluir. De este modo, este incremento de costos en la búsqueda de información podría generar como consecuencia que el servicio legal en este rubro sea más necesario, lo cual incrementaría los costos de registro de una marca, ya que los administrados tendría que contratar a un abogado para tener la seguridad de realizar de manera correcta su registro. Todo ello, partiendo de la premisa que existen usuarios que desconocen la Clasificación Internacional de Productos y Servicios Niza. De este modo, advertimos que, con esta modificación, se podría afectar tanto a los administrados como a la entidad de la siguiente manera:*

[11] Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - Artículo 245.- Quien inicie o vaya a iniciar una acción por infracción podrá pedir a la autoridad nacional competente que ordene medidas cautelares inmediatas con el objeto de impedir la comisión de la infracción, evitar sus consecuencias, obtener o conservar pruebas, o asegurar la efectividad de la acción o el resarcimiento de los daños y perjuicios. Las medidas cautelares podrán pedirse antes de iniciar la acción, conjuntamente con ella o con posterioridad a su inicio.

1. Los administrados tendrían que buscar ayuda especializada mediante abogados que conozcan la materia, pues será necesario determinar si estas clases pueden tener una conexión competitiva, generándoles así un mayor costo en el registro.
2. La Autoridad deberá generar una guía indicando cuales son las clases que mantienen una conexión competitiva, además realizar cambios en sus plataformas con la finalidad de que los solicitantes puedan obtener la información de manera eficiente, atendiendo a la política de simplificación administrativa.

Sobre el segundo punto, es importante precisar que no se ha tenido en cuenta que la identificación de conexión competitiva entre clases es diferente en cada caso en particular, pues para determinar la existencia de una conexión competitiva entre clases se analizan factores que varían respecto de cada caso en concreto. Es necesario advertir que la presente modificación no realiza precisión alguna al respecto, generando como efecto que no exista predictibilidad en el mencionado procedimiento administrativo[12].

Por todo lo expuesto, consideramos que para tener un análisis costo beneficio más completo sobre los beneficios que generaría la modificación normativa a la sociedad, es importante incorporar dentro del análisis los aspectos advertidos en el presente apartado.

b. *Respecto de la modificación del art. 61°-A y el art. 64. Sobre este punto, si bien es una medida que permitiría reducir costos procedimentales, en lo que implica la simplificación administrativa en los procedimientos de renovación y modificación, respectivamente, lo cierto es que, para todo titular es necesario contar con un certificado (digital o físico) que acredite la renovación por 10 años adicionales del registro de su marca o la modificación de esta, pues estamos hablando de derechos constitutivos que se originan con el registro. En ese sentido, consideramos que debería ampliarse estas propuestas modificatorias, de tal forma en la que se asegure la entrega del certificado en el plazo establecido o algún medio que permita al titular acreditar que su marca aún se encuentra vigente luego de transcurrido los 10 años de vigencia.*

Para poder alcanzar el objetivo de reducir a 10 días hábiles, en ambos procedimientos, consideramos importante realizar un análisis costobeneficio para determinar las herramientas (respecto del personal y los recursos económicos) que deben ser implementadas en el Indecopi. Además, se debe advertir la importancia de considerar la realidad actual de la entidad, pues el mismo tiene una carga importante en materia de registros, siendo probable que estas modificaciones generen un efecto contrario a los administrados produciendo un colapso- respecto de la carga- a las autoridades competentes. Asimismo, recomendamos incorporar al análisis costo beneficio del proyecto, un estudio sobre la compatibilidad de la propuesta con los postulados de la aplicación del Silencio Administrativo Positivo contenidos en la Ley N°27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

---

[12] Al respecto, la Ley 27444° en su artículo 15.1° señala lo siguiente: 1.15. Principio de predictibilidad o de confianza legítima. - La autoridad administrativa brinda a los administrados o sus representantes información veraz, completa y confiable sobre cada procedimiento a su cargo, de modo tal que, en todo momento, el administrado pueda tener una comprensión cierta sobre los requisitos, trámites, duración estimada y resultados posibles que se podrían obtener. Las actuaciones de la autoridad administrativa son congruentes con las expectativas legítimas de los administrados razonablemente generadas por la práctica y los antecedentes administrativos, salvo que por las razones que se expliciten, por escrito, decida apartarse de ellos(...)7 . El resaltado es nuestro

c. *Respecto de la modificación de los artículos 61°-B, 99° y 102° Sobre este punto, debemos advertir que, si bien el objetivo del presente proyecto es simplificar el registro y la renovación de trámites de registro de marca, es necesario tomar en cuenta la realidad en la cual se encuentra el Indecopi, por lo que recomendamos un análisis que permita determinar si la entidad se encuentra en la capacidad económica y de personal para cumplir con los plazos establecidos en el presente proyecto.*

En ese sentido, concluyeron preliminarmente, que el Proyecto de Ley bajo análisis es compatible con la normativa comunitaria que regula la materia. Sin embargo, merece un análisis profundo respecto de los costos de transacción necesarios para cumplir con el objetivo de simplificación administrativa y determinar se generaría un verdadero beneficio al administrado. No obstante, consideramos loable que existan propuestas legislativas que permitan o que tengan la intención de simplificar procedimientos administrativos en materia de Propiedad Industrial de forma beneficiosa para la sociedad y para el desarrollo de mercados más competitivos y eficientes, por lo que saludamos la propuesta legislativa.

4. **El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi)** mediante la opinión técnica señala lo siguiente:

Comentarios a la propuesta de modificación del artículo 58

14. El sistema multiclase contemplado en la legislación peruana fue incluido debido a la adhesión del Perú al Tratado de Marcas, de 1994 (administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual), que busca armonizar y simplificar los requisitos de forma de las solicitudes de registro que se presentan ante una autoridad competente. Este tratado sólo se encuentra referido a requisitos de forma. En esa línea, se permite presentar una única solicitud consignando productos y/o servicios en más de una clase (solicitud multiclase).

15. Bajo este sistema, el solicitante deberá consignar expresamente cada uno de los productos y/o servicios, agrupados por clases, y corresponderá al examinador verificar y evaluar su correspondencia en la clase solicitada. Adicionalmente, es importante mencionar que para determinar si el registro solicitado debe ser otorgado o no, el examinador de marcas evalúa la solicitud por clases y otorga o deniega por clases, según puede apreciarse de las resoluciones emitidas por la Dirección.

16. De ahí, que existe una etapa de Examen de Forma (para el análisis de requisitos formales por cada clase de productos y/o servicios) y un Examen de Fondo (para la decisión de otorgar o denegar el registro), también por cada clase solicitada, realizado por un equipo de examinadores.

17. Un hecho de gran relevancia a tener en consideración, es que, de conformidad con el segundo párrafo del artículo 151 de la Decisión 486, las clases no determinan la vinculación o conexión competitiva de los productos y/o servicios4 ; estos se analizan en cada caso concreto, atendiendo a los productos y/o servicios que consigne el usuario en la solicitud, lo que se traduce en el hecho que el servicio público de los Examinadores exige efectuar un análisis de la solicitud multiclase, considerando clase por clase.

18. Este particular análisis implica para los Examinadores de registros tener en cuenta la naturaleza de los productos y/o servicios, funciones de los productos, complementariedad, entre otros criterios; primero, para determinar si su clasificación por parte del solicitante es correcta o no, o si requiere de precisiones

o modificaciones para ser aceptada (Examen de Forma), y segundo, para determinar su identidad o vinculación o no con aquellos que distinguen signos distintivos registrados o solicitados con anterioridad (Examen de Fondo), tras lo cual los Examinadores podrán determinar si se otorga y/o deniega una solicitud.
19. De este modo, el hecho que una solicitud multiclase constituya una suerte de acumulación de solicitudes, si bien constituye una medida dirigida a facilitar la actuación de los administrados al momento de decidir el registro de una marca, no exonera a los Examinadores de realizar evaluaciones de forma y de fondo de todas y cada una de las solicitudes acumuladas.
20. De ahí que la vinculación y/o conexión competitiva no podría ser un criterio técnico para establecer una reducción del pago de las tasas, dado que el costo real del servicio público prestado por los Examinadores de la DSD no se simplifica, ni reduce, tal como lo hemos demostrado líneas antes. Modificación de tasas administrativas
21. Por su parte, el numeral 40.5 del artículo 40 del TUO de la Ley de Procedimiento Administrativo General establece que: "Las disposiciones concernientes a la eliminación de procedimientos o requisitos o a la simplificación de los mismos pueden aprobarse por Resolución Ministerial, por Resolución de Consejo Directivo de los Organismos Reguladores, Resolución del órgano de dirección o del titular de los organismos técnicos especializados, según corresponda, Resolución del titular de los organismos constitucionalmente autónomos, Decreto Regional o Decreto de Alcaldía, según se trate de entidades dependientes del Poder Ejecutivo, Organismos Constitucionalmente Autónomos, Gobiernos Regionales o Locales, respectivamente."
22. Asimismo, el artículo 44.5 del artículo 44 del mismo cuerpo normativo señala: Una vez aprobado el TUPA, toda modificación que no implique la creación de nuevos procedimientos, incremento de derechos de tramitación o requisitos, se debe realizar por Resolución Ministerial del Sector, o por resolución del titular del Organismo Autónomo conforme a la Constitución Política del Perú, o por Resolución de Consejo Directivo de los Organismos Reguladores, Resolución del órgano de dirección o del titular de los organismos técnicos especializados, según corresponda, Decreto Regional o Decreto de Alcaldía, según el nivel de gobierno respectivo.
23. En concordancia con ello, el numeral 19.1 del artículo 19 de los Lineamientos para la aprobación del Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA)5 aprobado mediante Resolución de Secretaría de Gestión Pública N° 005-2018-PCM-SGP, Lineamientos señala que una vez aprobado el TUPA, toda modificación que no implique la creación de nuevos procedimientos administrativos y servicios prestados en exclusividad, incremento de derechos de tramitación o requisitos, se aprueba, entre otros por el titular de los organismos técnicos especializados

24. El Indecopi es un Organismo Técnico Especializado; razón por la cual el INDECOPI está comprendido dentro de los alcances de la facultad de simplificar los procedimientos administrativos y servicios prestados en exclusividad contenidos en el TUPA de la entidad. En ese sentido, la Presidencia Ejecutiva, en su calidad de máxima autoridad del Indecopi, se encuentra facultada para emitir la resolución que modifica por simplificación administrativa el Procedimiento.
25. Atendiendo a lo expuesto, para formular modificaciones que implican la reducción de tasas administrativas, no se requiere que estas se encuentren contempladas en una norma con rango de Ley.
26. Por otro lado, el artículo 16 de los Lineamientos para la aprobación del Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA)6establece que el monto del costo real de los derechos del procedimiento se establece en función al costo

derivado de las actividades dirigidas a resolver lo solicitado y los gastos de operación y mantenimiento de la infraestructura.
27. Mediante Decreto Supremo N° 064-2010-PCM, se aprueba la metodología de determinación de costos de los procedimientos administrativos y servicios prestados en exclusividad comprendidos en los Textos Únicos de Procedimientos Administrativos (TUPA) de las Entidades Públicas, con el fin de establecer disposiciones de carácter general que precisen criterios, procedimientos y metodologías para la determinación de los costos de los procedimientos y servicios administrativos que brinda la administración y para la fijación de los derechos de tramitación, metodología que es de cumplimiento obligatoria para todas las entidades pública.
28. En el presente caso, dado que la propuesta contempla una reducción del monto de tasas en el procedimiento de solicitudes de registro de marca, resulta necesario que en la exposición de motivos se precise si el costo establecido en la propuesta normativa cubre el costo real y si se ha aplicado la metodología establecida en el Decreto Supremo N° 064-2010-PCM.
29. Sin perjuicio de lo anterior, como lo hemos señalado líneas antes, reiteramos que la tramitación de una solicitud de registro multiclase no implica menor trabajo para la administración desde que exige para los Examinadores una evaluación integral de todas y cada de las solicitudes acumuladas, tanto en su etapa de forma como de fondo.

Comentarios a la propuesta de modificación del artículo 61-A

Las renovaciones de registros, por tratarse de "procedimientos de inscripción registral", además de ser objeto de verificación del cumplimiento de los requisitos contemplados en los artículos 50 y 51 del Decreto Legislativo 1075 y sus modificatorias en lo que corresponda, constituyen procedimientos sujeto al silencio administrativo negativo, de conformidad con lo establecido en el artículo 38, numeral 38.1 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 38. Respecto a los plazos, cabe indicar que, si bien las solicitudes presentadas a través de la plataforma de renovación online se tramitan y resuelven de manera sumamente célere, esto ocurrirá siempre y cuando dichas solicitudes contengan datos del signo a renovar y de su titular o representante que sean validados por nuestra herramienta informática (donde no se permite el trámite en tanto existan expedientes relacionados o con actos previos).
39. Dicho de otra forma, si bien la plataforma de renovación en línea demanda tiempos muy cortos de tramitación (solo unos minutos), exige una validación automática de datos y requisitos para conceder la renovación, como por ejemplo, que la solicitud haya sido presentada por su titular o el representante que ya aparecía en el registro de la marca, ya que de tratarse de un nuevo representante o quien tiene legítimo interés o si la marca a renovar protege una clase que ha sufrido alguna variación en la Clasificación de Niza y amerita una nueva emisión de certificado (así como otras situaciones relevantes posibles a valorar antes de emitir la resolución), se requiere una valoración humana, por lo que estas situaciones deben ser consideradas al momento de establecer un plazo máximo para emitir un pronunciamiento en estas solicitudes. 40. Además, en el caso de las solicitudes ingresadas por la mesa de partes físicas y la mesa de partes virtual se debe considerar que para su atención se requiere adicionalmente, la realización de múltiples actividades que involucran gestión documental detalladas previamente, las cuales extienden los plazos de atención considerando el volumen de las solicitudes que son tramitadas.

41. Debe considerarse también que en las solicitudes presenciales o físicas el solicitante tiene la opción de incluir más de un certificado, sin límite alguno, situación que incrementa los plazos para evaluar y emitir un pronunciamiento ya que la evaluación se realiza para cada certificado de forma individual.
42. Asimismo, el hecho de no contar con los certificados y expedientes digitalizados, herramientas de inteligencia artificial, sistema de firma digital en forma masiva, repositorios y servidores de gran capacidad, dificulta que el flujo desde el ingreso hasta la conclusión del procedimiento aun cuando no tenga observaciones, pueda realizarse en un plazo de 10 días hábiles
43. Sin perjuicio de lo anterior, consideramos que sí es posible reducir razonablemente el plazo de tramitación de una solicitud de renovación, el cual debe considerar el flujo de actividades que se deben realizar como parte de la evaluación de estas solicitudes. El plazo razonable que sugerimos será definido luego de revisar el siguiente supuesto.

Comentarios a la propuesta de modificación del artículo 61-B

En el caso de aquellas renovaciones que ingresan por las mesas de partes física y la mesa de partes virtual, existe actividades de naturaleza manual que deben ser tomadas en cuenta al analizar la propuesta planteada. En estos casos, luego de asignada la solicitud, el registrador procede al armado y foliado de la documentación y recaudos y seguidamente realiza las coordinaciones respectivas para la obtención del certificado de la marca objeto de renovación; ello con la finalidad de verificar los datos de conexión de la solicitud con el registro respectivo. Asimismo, además del análisis de los requisitos formales, verifica la calificación registral que comprende la situación de la vigencia del registro, la legitimidad de los solicitantes y la posibilidad de reclasificar los productos o servicios que distingue la marca objeto de renovación de registro a la clasificación internacional vigente a la fecha de renovación, para decidir si corresponde emitir un certificado multiclase.
46. En caso de detectarse alguna observación, el registrador ingresa los datos al Sistema de Gestión de Expedientes de la Dirección de Signos Distintivos y procede a generar el proveído con las observaciones detectadas. Posteriormente firma digitalmente la cédula y remite al colaborador responsable para que realice la notificación respectiva. El plazo para absolver los requerimientos es de 30 días hábiles, contados desde el día siguiente de notificado el proveído respectivo conforme lo dispuesto en el artículo 61-B del Decreto Legislativo 1075 y sus modificatorias en lo que corresponda9 . Ahora bien, muchas veces se tiene que realizar sobrecartes debido a que los usuarios no consignan datos correctos de sus domicilios procesales, hechos que afectan el plazo. Además, los administrados suelen esperar el último día del plazo para absolver las observaciones.
47. Del mismo modo, aquellas solicitudes de renovación ingresadas por la plataforma de renovación en línea y que no cumplen con acreditar que cuentan con el poder para actuar en representación del titular de la marca o su legítimo interés o debe aclarar alguna situación evidenciada por el registrador, son notificadas a los solicitantes a fin de cumplan con subsanarlas en un plazo de 30 días hábiles contados desde el día siguiente de su notificación conforme lo dispuesto en el artículo 61-B del Decreto Legislativo 1075 y sus modificatorias en lo que corresponda.
48. Además, existen otras situaciones que afectan los plazos para emitir un pronunciamiento, como son los casos donde existe un acto modificatorio previo en trámite notificado por el plazo de 60 días hábiles o en casos de marcas

multiclase con trámite de renovación y que se inicia un trámite de división de una de las clases.
49. Sin perjuicio de lo anterior, en atención a la necesidad de proveer mejores tiempos de tramitación de los procedimientos de renovación de registros de marcas en favor de los ciudadanos, sugerimos que el plazo previsto en la Ley (de 180 días hábiles) se reduzca a 60 días hábiles.
50. Este plazo debe computarse desde la fecha de presentación de la solicitud hasta la fecha en que se emite la Resolución que resuelve la solicitud de renovación. Además, se sugiere que esta indicación del plazo para resolver este tipo de procedimientos se incluya en un artículo adicional, el cual sería el 61 C.

Comentarios a la propuesta de modificación del artículo 64

57. Las modificaciones a registros, al tratarse de procedimientos de inscripción registral oponibles a terceros, además de la verificación del cumplimiento de los requisitos contemplados en los artículos 50 y 51 del Decreto Legislativo 1075 y sus modificatorias, así como las formalidades establecidas en el artículo 14 de la mencionada norma legal11 , constituyen procedimientos sujeto al silencio administrativo negativo, de conformidad con lo establecido en el artículo 38, numeral 38.1 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
58. Asimismo, a fin de garantizar la seguridad jurídica que emanan de los Registros de la Propiedad Industrial, el registrador además de verificar el cumplimiento de las normas legales antes citadas, califica la vigencia de los antecedentes registrales de los signos distintivos, que no existan actos previos pendientes de inscripción, marcas similares de la clase pendientes de transferencia, renuncias totales o parciales en trámite relacionadas a las marcas o sus titulares en trámite de modificación, la legitimidad de los solicitantes, los datos de conexión de la solicitud con el registro, así como la verificación de que las modificaciones que estén afectando a las marcas estén abarcando a los lemas comerciales. Igualmente, en caso corresponda, se califica las divisiones de registros.
59. Cabe agregar que, en casos de transferencias de marcas se realiza además un examen de confundibilidad, a fin de identificar si existen marcas similares y, de ser el caso, disponer que se transfieran a favor de un mismo titular y evitar de esa forma inducir a riesgo de confusión a los consumidores. Ello por mandato del artículo 62 del Decreto Legislativo 1075 y sus modificatorias en lo que corresponda.
60. En casos de transferencias donde los titulares son personas naturales o miembros de una sociedad de gananciales, se realizan calificaciones adicionales para verificar que las marcas objeto de las mismas sean bienes de libre disposición y/o estén interviniendo las partes correspondientes. Si las transferencias son de nombres comerciales, el registrador debe verificar que se produzca junto con la empresa o establecimiento con el cual se venía usando. Por su parte, en caso de lemas comerciales, se deber verificar que las modificaciones que afecten a las marcas con las cuales son usados, también les afecten dado que son complemento de las mismas.
61. El análisis realizado se justifica en razón a que los Registros de Signos Distintivos no solo generan publicidad y seguridad jurídica, sino sobre todo oponibilidad frente a terceros.
62. En razón a ello, correspondería mantener el procedimiento de modificaciones de registro como uno sujeto al silencio administrativo negativo, de conformidad con lo establecido en el artículo 38, numeral 38.1 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

63. Respecto a los plazos, dado el nivel de análisis que amerita realizar en las etapas de calificación formal y de fondo en tanto se trata de actos de disposición, cambios de titularidad o afectaciones sobre signos distintivos, resulta irreal que el flujo desde el ingreso hasta la conclusión del procedimiento pueda realizarse dentro del plazo de 10 días hábiles.
64. Además, debe tenerse en cuenta que cuando una solicitud se presenta sin contar con alguno de los requisitos formales, corresponde conceder al solicitante un plazo de 60 días hábiles a fin de que presente la subsanación correspondiente, conforme lo dispuesto en el artículo 66.1 del Decreto Legislativo 1075 y sus modificatorias en lo que corresponda y de esta forma evite que su solicitud se tenga por no presentada; del mismo modo, dentro del procedimiento existen otros requerimientos que deben ser subsanados y forman parte del examen formal de este tipo de solicitudes, como el caso de la presencia de signos similares que no son transferidos.
65. Finalmente, el hecho de no contar con los certificados y expedientes digitalizados, herramientas de inteligencia artificial, sistema de firma digital en forma masiva, repositorios y servidores de gran capacidad, así como el reducido número de profesionales especializados en derecho registral de intangibles con el que cuenta la Dirección de Signos Distintivos, hace inviable una reducción al plazo propuesto.
66. Sin perjuicio de lo anterior, conscientes de la necesidad de proveer mejores tiempos de tramitación de los procedimientos de actos modificatorios en favor de los ciudadanos, atendiendo a las situaciones antes mencionadas, sugerimos que el plazo previsto en la Ley (de 180 días hábiles) se reduzca a 90 días hábiles.
67. Este plazo deberá computarse desde la fecha de presentación de la solicitud hasta la fecha en que se emite la resolución que resuelve la solicitud de acto modificatorio. Además, se sugiere que esta indicación del plazo para resolver este tipo de procedimientos se incluya en un artículo adicional, el cual sería el 64-B.
68. De igual modo, dado que el procedimiento de renuncia al registro de marca tiene un flujo similar al de los procedimientos de inscripción de actos modificatorios, consideramos relevante incluirlo dentro de los plazos sugeridos para este último (90 días hábiles), siendo incluido en un artículo adicional el cual sería el 64-A-4.

Comentarios a la propuesta de modificación del artículo 99

73. A priori, se aprecia que el plazo de la propuesta de modificación (10 días hábiles), es un plazo razonable; sin embargo, es fundamental precisar que, dicho plazo se debe computar desde la fecha de presentación de la solicitud o, desde la fecha en que se atienda el requerimiento de subsanación de formalidades de la autoridad, hasta la fecha en que se emite la resolución que ordena realizar la inspección.
74. Como ocurre con todo procedimiento administrativo que se inicia a instancia de parte, el Procedimiento de Visitas Inspectivas tiene su punto de partida en la presentación de la solicitud. Una vez formulada, esta es sometida al análisis de cumplimiento de los requisitos señalados en el TUPA de la entidad, siendo que, en caso la autoridad identifique la omisión de requisitos, ordenará su subsanación, luego de lo cual, y una vez levantadas las observaciones, la autoridad emitirá la resolución que dispone realizar la inspección.
75. En este sentido, el plazo para el procedimiento de inspección debe entenderse que discurre entre la fecha de presentación de la solicitud (o la fecha de subsanación de la misma), y el plazo de emisión de la resolución. Esta precisión es necesaria debido a que, tras la emisión de la resolución mencionada, se inicia

una etapa de ejecución de la misma, en la que se producirá el acto de inspección como tal.

76. Al respecto, se debe tener en cuenta que, a diferencia de la fase de emisión de la resolución que ordena la inspección, la fase de ejecución depende de dos (2) aspectos que no se encuentran bajo control de la autoridad, como son:

i) El plazo que la ley ha conferido al solicitante para coordinar la realización de la inspección:

De conformidad con el artículo 118 del Decreto Legislativo N° 107515, una vez que el solicitante ha sido notificado con la resolución que ordena la realización de la Visita Inspectiva, dicho administrado cuenta con un plazo de 30 días hábiles para coordinar con el Indecopi la realización de la diligencia, bajo apercibimiento de declararse en abandono el procedimiento.

Cabe precisar, que el plazo de 30 días hábiles permite a los administrados coordinar con el Indecopi la estrategia de inspección, algunas veces relacionada con el hecho de llevar a cabo la diligencia en zonas de difícil acceso o riesgo.

En otras ocasiones, el plazo les permite a los solicitantes definir y formalizar la representatividad con la que actuarán en el lugar y momento de la inspección.

De otro lado, cuando la inspección está destinada a ejecutar medidas cautelares, como por ejemplo, el comiso de productos, el plazo de 30 días hábiles favorece al administrado para que organice la logística que resulte necesaria, dado que, de conformidad con lo establecido en el artículo 114 del Decreto Legislativo N° 1075, las medidas cautelares se dictan bajo cuenta, costo y responsabilidad del solicitante, lo que implica que, en aquellas inspecciones donde se ejecutan medidas cautelares (como el comiso), los solicitantes son designados por la autoridad como depositarios de los bienes comisados, lo que trae consigo que estos deban prever los costos de estiba, transporte y almacenaje correspondientes, de ahí, que los solicitantes necesiten contar con un plazo suficiente para organizarse y efectuar las coordinaciones necesarias.

ii) La oportunidad para realizar la inspección: La determinación de la oportunidad para llevar a cabo la inspección constituye un aspecto decisivo en su eficacia. Así, por ejemplo, en el caso de las inspecciones en almacenes aduaneros (sobre las que por cierto versan la gran mayoría de solicitudes de inspección), la resolución que ordena la inspección no puede ejecutarse mientras la autoridad aduanera no disponga el "levante" 18 de la mercadería. Dicho levante, sólo es otorgado cuando la autoridad aduanera verifica el cumplimiento de los requisitos correspondientes por parte del importador, exportador o consignatario (cuya mercancía debe ser inspeccionada). En este sentido, pese a que la decisión de realizar la inspección es dictada por el Indecopi con gran rapidez, la inspección queda en suspenso hasta que Sunat disponga el "levante" señalado, y ello, a su vez, está condicionado a que el importador o exportador o consignatario atienda las observaciones que Sunat le formule. Asimismo, las inspecciones deben realizarse en la mejor oportunidad que corresponda. Por ejemplo, en los casos en los que el solicitante indica que la inspección debe realizarse en la temporada de una feria comercial, o un circo, o un concierto musical o en la fiesta de fin de año, etc., será necesario esperar hasta dicha oportunidad.

77. De este modo, se estima como razonable y viable el plazo máximo legal propuesto para el procedimiento de inspección (10 días hábiles), en la medida que se entienda que este plazo se computa entre la fecha de presentación de la solicitud (o, desde la subsanación de omisiones) y la fecha de emisión de la resolución, habida cuenta que la temporalidad de la fase de ejecución no se encuentra bajo control del Indecopi, tal como lo hemos sustentado en los párrafos precedentes.

De este modo, se propone efectuar la precisión correspondiente en el párrafo de modificación propuesto de la siguiente manera, así como en el tercer párrafo del artículo 118 del texto legal, a fin de que su texto sea consistente con la propuesta:

> *Artículo 99.- Procedimiento a solicitud de parte*
> *99.1 En caso de que el procedimiento se inicie a solicitud de parte, la denuncia debe contener lo siguiente:*
> *(...)*
> *99.2 Si se solicitan medidas cautelares, y éstas deben ejecutarse en el local del presunto infractor y/o en el que se presume se comete la infracción por éste, deberá solicitarse la visita inspectiva correspondiente, previo pago de la tasa establecida. Para tal efecto, se otorga un plazo de dos (02) días hábiles, bajo*
>
> *99.3 Para el procedimiento de solicitud de visita inspectiva, el plazo máximo establecido no deberá superar los diez (10) días hábiles, contados desde la fecha de presentación de la solicitud* ***o subsanación de omisiones, de ser el caso, hasta la fecha de emisión de la resolución que ordena la inspec****ción. (Lo subrayado es nuestro).*
>
> *Artículo 118.- Diligencias de inspección En cualquier etapa de un procedimiento, o antes de su inicio, se podrá practicar una diligencia de inspección de oficio o a pedido de parte. Ésta será efectuada por la Dirección competente o por la persona designada por ella. La solicitud de inspección deberá estar debidamente sustentada; asimismo, deberá acreditarse el pago de la tasa correspondiente e indicarse el lugar en el que ésta deberá llevarse a cabo. En caso de inspecciones a pedido de parte, éstas deberán practicarse previa coordinación con el solicitante, quien cuenta con un plazo de treinta (30) días hábiles para efectuar dicha coordinación* ***desde la fecha de notificación de la resolución que ordena la inspección.*** *Transcurrido el plazo señalado sin que esta última se produzca, el expediente caerá en abandono si la visita inspectiva constituye la finalidad del procedimiento o si junto con ésta se iba a proceder a notificar la denuncia al presunto infractor; en los demás casos, el procedimiento continuará según el estado en el que se encuentre. Siempre que se realice una visita inspectiva deberá levantarse un acta que será firmada por quien estuviera a cargo de la misma así como por los que participaron en ella. En caso de que el denunciado, su representante o el encargado del establecimiento se negaran a hacerlo, se dejará constancia de tal hecho. (Lo subrayado es nuestro).*

Comentarios a la propuesta de modificación del artículo 112

82. Se aprecia que el plazo previsto en el proyecto (15 días hábiles) es un plazo razonable y viable, de tal forma que estamos conformes con el mismo. No obstante, se sugiere que, para una mayor precisión, se establezca que el plazo señalado se compute no solo desde la fecha de presentación de la solicitud, sino también, desde la fecha de subsanación de omisiones, para aquellos casos en que el Indecopi haya efectuado algún requerimiento de subsanación de requisitos previstos en el TUPA.

De este modo, se propone efectuar la precisión correspondiente en el párrafo de modificación propuesta de la siguiente manera:

> **Artículo 112**.- Solicitud y modificación de las medidas cautelares
>
> Las solicitudes de medidas cautelares se presentan por el titular del derecho respectivo y deben cumplir con los mismos requisitos previstos en el artículo 99 del presente Decreto Legislativo en lo que corresponda. De

no cumplir con tales requisitos, se notifica al solicitante para que subsane las omisiones en las que se hubiera incurrido en el plazo de dos (02) días hábiles, bajo apercibimiento de tenerse por no presentada la solicitud.

Las medidas cautelares deberán ser concedidas o rechazadas en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles desde la fecha de presentación de la solicitud o subsanación de omisiones, de ser el caso.

Las medidas cautelares pueden ser modificadas o levantadas durante el curso del procedimiento, de oficio o a instancia de parte. (Lo subrayado es nuestro).

5. En atención a la solicitud de la congresista Adriana Tudela, mediante Oficio N° 00012-2022-PRE/INDECOPI del 12 de enero del 2022, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) cumplió con atender lo solicitado, para lo cual adjuntó lo siguiente:

    a. Texto Único de Procedimientos Administrativos (Tupa) vigente, conteniendo la base legal y los plazos de los procedimientos indicados en el Oficio N° 071-2021-2022-AJTG.
    b. Tablas ASME de los referidos procedimientos, conteniendo los pasos y actividades a seguir para la atención de los procedimientos.
    c. Estructura de costos del derecho de tramitación exigido por cada clase adicional en la solicitud de registro de marcas. De la información remitida, se evidencia que todos los procedimientos observados consignan el plazo máximo establecido en el Decreto Legislativo N° 1075.

Cuadro 02

Procedimiento	Plazo
Registro de marca	180 días
Renovación de marca	180 días hábiles
Modificación del registro	180 días hábiles
Visita Inspectiva	180 días hábiles
Solicitud de medida cautelar	180 días hábiles

VI. Análisis costo beneficio

La modificación del Decreto Legislativo N°1075, con la finalidad de simplificar los procedimientos administrativos en las materias correspondientes, por lo que se debe analizar si los costos de la modificación producirían mayores beneficios a los administrados.

Simplificar los procedimientos de manera clara permite que la supervisión y la resolución de estos sean menos costosas. Sin embargo, este proceso de simplificación podría generar costos elevados como lo han señalado el CEPI y el Indecopi, sin embargo al buscar que la normativa se vuelva clara y sencilla de ejecutar, implicaría una inversión elevada en mecanismos que permitan que las mismas sean eficientes.

En lo que respecta a la propuesta de reducción de tasas, para el caso de solicitudes multiclase, el costo real del servicio de evaluación de tales solicitudes es esencialmente el mismo que exige la evaluación de solicitudes de una sola clase, de donde se debe colegir que, el criterio de acumulación de solicitudes en un solo petitorio (solicitud multiclase) no permitiría justificar una eventual reducción de las tasas en solicitudes multiclase.

En la exposición de motivos de la propuesta no se verifica que se haya evaluado que la reducción del monto de las tasas (en los procedimientos de solicitudes de registro de marca multiclase) permitirá cubrir el costo real del servicio. Tampoco se verifica si se ha aplicado la metodología de costeo de tasas administrativas establecida en el Decreto Supremo N° 064-2010-PCM.

La reducción de plazos que propone la iniciativa legislativa son positivas por lo que se acogen proponiendo plazos más reales posibles de cumplir por la autoridad. La reducción de los plazos no implica necesariamente un aumento de los costos, pues dichos cambios pueden abordarse con el personal actual de la entidad, mediante el replanteamiento de su sistema operativo, promoviendo y priorizando los principios de celeridad y predictibilidad, reconocidos en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS.

Tal como lo hace ver el Proyecto de Ley 1375/2021-CR los *posibles aumentos de carga laboral sin la implicación de una inyección de mayor presupuesto y/o personal constituye una buena práctica habitual del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi). A manera de ejemplo, mediante Resolución N° 004-2021-PRE/INDECOPI del 28 de junio de 2021, se aprobó la adscripción simultánea de la Secretaría Técnica Regional de Eliminación de Barreras Burocráticas en las Oficinas Regionales de doce (12) regiones del Perú, cuando en periodos anteriores únicamente se encontraba adscrita a dos (2) Oficinas Regionales. Dicha resolución fue emitida sin ninguna figura de reestructuración de personal o presupuestaria.*

La simplificación de los procedimientos de registro, renovación y modificación, incrementará el número de solicitudes para la realización de estos procedimientos, lo cual implica un aumento en el nivel de recaudación del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi).

El Texto Sustitutorio que propone el presente dictamen presenta las siguientes incidencias:

Incidencia para el usuario del registro

Costo	Beneficios
Ninguno	• Reducción de los plazos en los procedimientos de renovación de registro y de actos modificatorios. • Normatividad más clara sobre el registro de la propiedad industrial promoverá la innovación y la competitividad. • Favorece la creación de emprendimientos y fomenta la inversión privada al amparo de los objetivos plasmados en el Capítulo

	Económico de la Constitución Política del Perú.

Incidencia para el Estado/Indecopi como Autoridad

Costo	Beneficios
• Adecuación de los recursos humanos del Indecopi con el fin de hacer más eficiente los procedimientos marcarios • Adecuación de las herramientas virtuales con el fin de hacer más eficiente los procedimientos marcarios	• Promueve la Simplificación administrativa • Normatividad más clara sobre el registro de la propiedad industrial promoverá la innovación y la competitividad. • La acotación de los plazos para renovar y modificar el registro de la marca proporcionará mayor seguridad jurídica, lo que promocionará la inversión privada y el ingreso de emprendimientos innovadores. • Cumplimiento con la protección en su rol constitucional como Estado en la protección de los intereses de la economía y consumidores. • Simplifica el procedimiento de registro y renovación del registro de marca y, asimismo, eliminar exigencias costosas para el administrado. • Reduce los plazos establecidos para las solicitudes de visita inspectiva y medida cautelar, con el objetivo de fortalecer. • Hace más efectivos los mecanismos de protección marcaria frente a terceros.

El presente dictamen no genera costos adicionales a los agentes económicos ni a la ciudadanía en general, en tanto los costos económicos y temporales incurridos por las denunciantes se reducirán. Se promoverá la iniciativa privada y la innovación, beneficiando en última ratio a toda la ciudadanía.

Se simplifica el procedimiento de registro y renovación del registro de marca, así como se fortalece y hace más efectivos los mecanismos de protección de marcas, en pos de promover y facilitar el camino hacia la reactivación económica del país, apoyando a los emprendedores nacionales para participar en el mercado nacional.

V. CONCLUSIÓN

Por las consideraciones expuestas, la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos, de conformidad con lo establecido en el literal b) del artículo 70 del Reglamento del Congreso de la República, recomienda la APROBACIÓN del Proyecto de Ley **1375/2020-CR,** con el siguiente texto sustitutorio:

TEXTO SUSTITUTORIO

LEY QUE MODIFICA EL DECRETO LEGISLATIVO 1075, DECRETO LEGISLATIVO QUE APRUEBA DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS A LA DECISIÓN 486 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA QUE ESTABLECE EL RÉGIMEN COMÚN SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL, SIMPLIFICANDO EL REGISTRO, LA

RENOVACIÓN Y LA PROTECCIÓN DE LAS MARCAS Y ELEMENTOS DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Artículo 1. Modificación de los artículos 64-A, 99, 112 y 118 del Decreto Legislativo 1075, Decreto Legislativo que aprueba Disposiciones Complementarias a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial

Se modifican los artículos 64-A, 99, 112 y 118 del Decreto Legislativo 1075, Decreto Legislativo que aprueba Disposiciones Complementarias a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial, en los siguientes términos:

> **"Artículo 64-A.- Renuncia al registro**
> **[...]**
> **64-A.4 Para el procedimiento de solicitud de renuncia total o parcial al registro, el plazo máximo establecido no debe superar los noventa (90) días hábiles contados desde la fecha de presentación de la solicitud hasta la fecha de emisión de la resolución que resuelve la solicitud de renuncia.**
>
> **Artículo 99.- Procedimiento a solicitud de parte**
> **[...]**
>
> **99.3 Para el procedimiento de solicitud de visita inspectiva, el plazo máximo establecido es de diez (10) días hábiles contados desde la fecha de presentación de la solicitud o subsanación de omisiones, de ser el caso, hasta la fecha de emisión de la resolución que ordena la inspección.**
>
> **Artículo 112.- Solicitud y modificación de las medidas cautelares**
>
> Las solicitudes de medidas cautelares se presentan por el titular del derecho respectivo y deben cumplir con los mismos requisitos previstos en el artículo 99 del presente Decreto Legislativo en lo que corresponda. De no cumplir con tales requisitos, se notifica al solicitante para que subsane las omisiones en las que se hubiera incurrido en el plazo de dos (02) días hábiles, bajo apercibimiento de tenerse por no presentada la solicitud.
>
> **Las medidas cautelares deben ser concedidas o rechazadas en un plazo no mayor de quince (15) días hábiles contados desde la fecha de presentación de la solicitud o subsanación de omisiones, de ser el caso.**
>
> Las medidas cautelares pueden ser modificadas o levantadas durante el curso del procedimiento, de oficio o a instancia de parte.
>
> **Artículo 118.- Diligencias de inspección**
> En cualquier etapa de un procedimiento, o antes de su inicio, se podrá practicar una diligencia de inspección de oficio o a pedido de parte. Ésta será efectuada por la Dirección competente o por la persona designada por ella.
>
> La solicitud de inspección deberá estar debidamente sustentada; asimismo, deberá acreditarse el pago de la tasa correspondiente e indicarse el lugar en el que ésta deberá llevarse a cabo.

En caso de inspecciones a pedido de parte, éstas deberán practicarse previa coordinación con el solicitante, quien cuenta con un plazo de treinta (30) días hábiles para efectuar dicha coordinación, **contado desde la fecha de notificación de la resolución que ordena la inspección**. Transcurrido el plazo señalado sin que esta última se produzca, el expediente caerá en abandono si la visita inspectiva constituye la finalidad del procedimiento o si junto con ésta se iba a proceder a notificar la denuncia al presunto infractor; en los demás casos, el procedimiento continuará según el estado en el que se encuentre.
[...]."

Artículo 2. Incorporación de los artículos 61-C y 64-B al Decreto Legislativo 1075, Decreto Legislativo que aprueba Disposiciones Complementarias a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial

Se incorporan los artículos 61-C y 64-B al Decreto Legislativo 1075, Decreto Legislativo que aprueba Disposiciones Complementarias a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial, con la siguiente redacción:

"Artículo 61-C. Plazo del procedimiento de solicitud de renovación del registro

Para el procedimiento de solicitud de renovación del registro, el plazo máximo para otorgar o denegar tal solicitud es de sesenta (60) días hábiles contados desde la fecha de presentación de la solicitud hasta la fecha en que se emite la resolución que resuelve la solicitud de renovación.

Artículo 64-B.- Plazo del procedimiento de solicitud de inscripción de modificaciones

Para el procedimiento de solicitud de inscripción de modificaciones, el plazo máximo para otorgar o denegar tal solicitud es de noventa (90) días hábiles contados desde la fecha de presentación de la solicitud hasta la fecha en que se emite la resolución que resuelve la solicitud de inscripción de modificaciones."

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL

ÚNICA. Reglamentación y adecuación

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), en un plazo no mayor de sesenta (60) días hábiles desde la vigencia de la presente ley, adecúa su Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) así como sus plataformas virtuales para que los solicitantes obtengan información eficiente, según la política de simplificación administrativa.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA TRANSITORIA

ÚNICA. Procedimientos en trámite

Los procedimientos a cargo de los órganos competentes del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) que, a la fecha de vigencia de la presente ley se encuentren en trámite, continúan siendo tramitados bajo el procedimiento anterior.

Dese cuenta
Sala de Comisión

Lima, 3 de mayo de 2022.



Firmado digitalmente por: TACURI VALDIVIA German Adolfo FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 05/05/2022 11:32:40-0500



Firmado digitalmente por: LUNA GALVEZ Jose Leon FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 04/05/2022 21:27:13-0500



Firmado digitalmente por: GONZA CASTILLO Américo FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 05/05/2022 11:08:36-0500



Firmado digitalmente por: RIVAS CHACARA Janet Milagros FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 05/05/2022 12:10:59-0500



Firmado digitalmente por: CICCIA VASQUEZ Miguel Angel FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 05/05/2022 13:07:04-0500



Firmado digitalmente por: MONTEZA FACHO Silvia Maria FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 05/05/2022 14:30:46-0500



Firmado digitalmente por: LOPEZ UREÑA ILICH FREDY FIR 42834886 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 05/05/2022 15:46:03-0500



Firmado digitalmente por: CORDERO JON TAY Luis Gustavo FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 05/05/2022 15:11:14-0500



Firmado digitalmente por: OBANDO MORGAN Auristela Ana FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 06/05/2022 09:32:10-0500

ACTA

COMISIÓN DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR Y ORGANISMOS REGULADORES DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

PERIODO ANUAL DE SESIONES 2021-2022

DÉCIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA

Martes, 3 de mayo de 2022

Sumilla:

Se aprobó por unanimidad:

- *El dictamen recaído en los proyectos de ley 1217/2021-CR y 1221/2021-CR que, con texto sustitutorio, proponen la ley que modifica la ley 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, garantizando la atención personal del proveedor al ofrecer sistemas de atención automatizada.*

- *El dictamen recaído en el Proyecto de Ley 1375/2021-CR que, con texto sustitutorio, propone la ley que modifica el Decreto Legislativo 1075, decreto legislativo que aprueba disposiciones complementarias a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que establece el régimen común sobre propiedad industrial, simplificando el registro, la renovación y la protección de las marcas y elementos de la propiedad industrial.*

- *La dispensa del trámite de aprobación del Acta de la Décima Octava Sesión Ordinaria, para ejecutar los acuerdos adoptados.*

En la Plataforma Virtual *Microsoft Teams*, siendo las 11 horas con 22 minutos del día martes 03 de mayo de 2022, se reunieron bajo la presidencia del congresista José León Luna Gálvez, los congresistas miembros titulares Alfredo Pariona Sinche, Américo Gonza Castillo, Germán Adolfo Tacuri Valdivia, Janet Milagros Rivas Chacara, Luis Gustavo Cordero Jon Tay, Auristela Ana Obando Morgan, Ilich Fredy López Ureña, Silvia María Monteza Facho, Diego Alonso Bazán Calderón y Miguel Ángel Ciccia Vásquez.

El señor Presidente con el quórum reglamentario, dio inicio a la Décima Octava Sesión Ordinaria de la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos del Periodo Anual de Sesiones 2021-2022.

I. ACTA

El señor Presidente dejó constancia que el acta de la Décima Sétima Sesión Ordinaria, fue aprobada en su oportunidad, con dispensa de su lectura.

II. DESPACHO

El señor Presidente dio cuenta de los documentos ingresados y remitidos.

III. INFORMES

No hubo informes.

IV. PEDIDOS

No hubo pedidos.

V. ORDEN DEL DÍA

5.1 El Nivel de concentración del virus SARS-Cov2 en las aguas residuales de Lima Metropolitana y a nivel nacional y la situación de las Plantas de Tratamiento PTAR, consecuencias para los usuarios

El señor Presidente señaló que a inicios de este año, las noticias daban cuenta de la alarma surgida por la presencia de altas concentraciones del virus SARS-Cov2 en las aguas residuales de Lima Metropolitana. En dicha fecha las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) La Chira, Taboada, San Juan y Puente Piedra superaron, cada una, su nivel más alto de concentración de dicho virus.

En esa preocupación, con el ánimo de hacer un seguimiento a este tema, que tiene repercusión directa en los usuarios, es que se ha invitado a funcionarios del Ministerio de Vivienda y de la Sunass, para que informen ante la Comisión sobre esta problemática y que se detallen cuáles son las consecuencias en los usuarios, y qué acciones están adoptando al respecto.

En este estado, se informa que se encuentra en la sala, la señora Margot Huataquispe Vásquez, Directora General de Políticas y Regulación en Construcción y Saneamiento del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, quien está acompañada del señor Víctor Alberto Varillas Borja, Director de Saneamiento del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, así como el señor Julio Kosaka, Director de Fiscalización de la Sunass. Seguidamente, les dio la bienvenida y les otorgó el uso de la palabra en el orden señalado.

La señora Margot Huataquispe Vásquez, Directora General de Políticas y Regulación en Construcción y Saneamiento del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento mediante el uso de diapositivas expuso sobre la herramienta de alerta temprana a partir del monitoreo epidemiológico de aguas residuales desde el sector saneamiento y sobre los estudios de la posible existencia del virus SARS-COV-2 en las redes del alcantarillado, como de los colectores, y del ingreso del PTAR. Luego trató sobre el proceso del tratamiento de las aguas residuales y dijo que, el objetivo era analizar este virus y darle un insumo al Minsa, porque en si ellos lo utilizan directamente, además que dicha entidad puede saber qué concentración hay en cada zona.

En las conclusiones de su exposición, refiere que los incrementos en los niveles de concentración de los resultados de laboratorio para las semanas 54 (10 a 16 enero) y 55 (17 a 23 enero) en Lima Metropolitana y la semana 55 en Arequipa Metropolitana coincidieron con el incremento en el número de casos positivos reportados por los sistemas de salud como resultado de la tercera ola de contagios por COVID-19. Los resultados del monitoreo del SARS-COV-2 mostraron la disminución de la presencia a partir de la semana 56 (24 a 30 ene) en adelante.

El señor Víctor Alberto Varillas Borja, Director de Saneamiento del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento complementando la exposición antes señalada, trató sobre el proceso del tratamiento de las aguas residuales con relación al virus SARS-COV-2, al mismo tiempo, dijo que se cuenta con la normatividad que aprueba el cumplimiento de límites máximos permisibles, que es, digamos un parámetro de control de calidad con el que luego debe de salir las aguas residuales como efluentes de plantas de tratamiento, entre otros puntos relacionados.

El señor Julio Kosaka, Director de Fiscalización de Sunass con el uso de diapositivas expuso sobre las competencias del marco normativo, básicamente el tema de la situación de las plantas de tratamiento de aguas residuales en el Perú y sobre el estado de las aguas residuales, cobertura de aguas residuales, tamaños de EP, y de la clasificación de Empresas Prestadoras a nivel nacional.

Por otro lado, desarrolló los siguientes puntos: cobertura de alcantarillado, evolución anual por tamaño de EP (en porcentajes); evolución del tratamiento de aguas residuales en empresas prestadoras; cobertura del tratamiento de aguas residuales (TAR); evolución anual por tamaño de EP (en porcentajes) y luego pasó a tratar sobre las principales localidades que no cuentan con tratamiento de aguas residuales; y, haciendo uso de datos estadísticos, detalló los lugares a nivel nacional.

Asimismo, abordó sobre los principales problemas de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales: en cuanto a la capacidad PTAR refirió los aspectos; la capacidad PTAR y refirió que trabajan por encima de su capacidad hidráulica y por encima de su capacidad orgánica y las eficiencias de Tratamiento. Señaló que la mayor parte de las PTAR no cuentan con un sistema de tratamiento que les permita remover los coliformes termo tolerantes de acuerdo a los LMP. Y en cuanto a la Operación y Mantenimiento, contempla lo siguiente; personal de operación y mantenimiento Pocas PTAR cuentan con personal permanente que la opere. Mencionó que el personal que opera PTAR no tiene formación técnica. Alta rotación de personal en las empresas prestadoras.

Siguiendo con su exposición, se refirió a las situaciones del estado de las aguas residuales de Lima Metropolitana; brecha de Inversiones en saneamiento, que se requiere inversión de 9.9 miles de millones de soles para cobertura de tratamiento de aguas residuales "urbana" al 79.7% (año 2026); proyección de cobertura del servicio de tratamiento de aguas residuales por departamento en el ámbito urbano, según PNS y respecto al proceso de Adecuación progresiva de PTAR.

Finalmente, en sus conclusiones, dio a conocer los siguientes puntos: supervisión, dotar a las entidades sectoriales competentes del presupuesto y personal necesario para efectuar acciones de supervisión, Infraestructura: Invertir y priorizar el equipamiento y mejora de las infraestructuras, no sólo de la PTAR sino del sistema de alcantarillado. Operación y mandamiento: Destinar presupuesto para las acciones de acuerdo a la normativa vigente. Fortalecer y capacitar al personal técnico. Marco Legal: Evaluar el cumplimiento las exigencias normativas referidas a LMP, ECAs, Ley de Recursos Hídricos, de acuerdo a las tecnologías de las PTAR y al PNS. Tecnología de tratamiento: Establecer criterios técnicos para la selección de la tecnología de tratamiento, considerando la sostenibilidad y capacidad de la EP y sobre la participación privada: Fomentar la inversión privada cofinanciada a través de empresas de mantenimiento de PTAR o mediante contratos APP, con alcance de contratos adecuados.

5.2 Predictamen recaído en el Proyecto de Ley 413/2021-CR, por el que se propone la ley que modifica la Ley 26221, Ley Orgánica de Hidrocarburos, para fortalecer el abastecimiento de los derivados del petróleo en favor de los consumidores

El señor Presidente señaló que continuando con el estudio de los proyectos de ley, se tiene este predictamen, el cual quedó en cuarto intermedio, con la finalidad de invitar, escuchar las opiniones, y propuestas de representantes de las instituciones involucradas. Por ello, se ha invitado a la doctora Luz Eyzaguirre Gorvenia, Decana de la Facultad de Ingeniería de Petróleo, Gas Natural y Petroquímica de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), quien ha delegado su participación en el ingeniero químico Sebastián Barreda Tamayo y al señor

Héctor Plate Cánepa, presidente del Organismo Peruano de Consumidores y Usuarios (OPECU). Seguidamente, les dio la bienvenida y les otorgó el uso de palabra cada uno.

El señor Héctor Plate Cánepa, presidente del Organismo Peruano de Consumidores y Usuarios (OPECU) mediante el uso de diapositivas y estadística, trató sobre los alcances del Gasohol 90 octanos, variación del precio de referencia internacional, versus precio neto de Repsol y Petroperú, 2012-2013; precio promedio mensual de Petróleo; Repsol y Petroperú vs. Referencia internacional 2018-2019 y sobre el tema de variación semanal del precio neto de Petroperú versus precio de referencia internacional.

Por otro lado, abordó sobre los alcances del balón de gas doméstico de GLP peruano, que abarca los siguientes puntos: variación de precio del gas licuado de petróleo envasado (GLP) del productor Pluspetrol e impacto en el balón de gas de GLP peruano, julio 2015-2016; precio del balón de gas doméstico de 10 kilos (GLP peruano) precio propano MONT BELVIEU-EEUU; de referencia internacional 2018-2019; gas licuado de petróleo envasado (GLP E) en soles por 10 kilos, incluido impuesto, actualización de la banda de precios del GLP envasado – fondo de estabilización de precios de combustible (FEPC) 2018-2020.

Asimismo, ahondó y desarrolló los temas de la variación del precio del gas licuado de petróleo (GLP) en soles por 10 kilos, incluido impuesto, precios de referencia internacional MONT BELVIEU, producto PLUSPETROL, fondo de estabilización de precio combustibles y balón de gas 2018-2020 y sobre el punto de la exclusión del gas licuado de petróleo envasado (GLP) del fondo de estabilización de precios de combustibles derivados del petróleo e impacto en el balón de gas de GLP peruano.

El señor Sebastián Barreda Tamayo, ingeniero químico empezó su exposición tratando sobre los antecedentes del precio del GLP, de su situación actual y de su utilidad en los diferentes aspectos, y explicó sobre los alcances del impuesto selectivo al consumo. Luego, desarrolló sobre el contenido de los alcances de la Ley de hidrocarburos. Asimismo, desarrolló sobre las formas de la masificación del gas y sobre la situación de la demanda y desabastecimiento de los almacenamientos del gas, petróleo, Pluspetrol. Asimismo, trató sobre la importación del GLP y observó sobre la decadencia de almacenamiento en emergencia.

Cree en la importancia y oportunidad del proyecto en debate, que debe ayudar de una vez a poner en regla los organismos del tema privado, importadores, públicos y empresas del Estado. Comentó que ha habido emergencia de GLP en Lima y que Petroperú tuvo que en menos de una semana habilitar el despacho adicional de GLP, para abastecer a los clientes críticos de Zeta gas y Solgas. Alertó que Pluspetrol sigue siendo el mayor abastecedor de GLP nacional.

Observó que se debe empezar por poner orden, porque el mar ya no es seguro para abastecer los combustibles, se tiene que hacer una red de ductos por tierra y que la refinería de La Pampilla, tuvo una envasadora de GLP, y comercialización, pero se dejó allí para permitir que la inversión privada participe.

El señor Presidente invitó a los señores congresistas a formular sus preguntas e inquietudes.

Al mismo tiempo, preguntó que, en cuanto a la propuesta legislativa, en su opinión qué se podría agregar o quitar al proyecto de ley, para que sea viable y lograr un instrumento beneficioso para el país.

Al respecto, **el señor Sebastián Barreda Tamayo, ingeniero químico** dijo que en Petroperú siempre se ha guiado por el líquido, porque esos 15 días de inventario lo respetaban.

Entonces, dijo que, antes que declarar de interés nacional, lo primero es saber, que es un servicio, que no se tiene que declarar. Invocó y dijo que ojalá que este gobierno logre que Petroperú, por lo menos tenga el lote de Talara, no obstante, aquí se pone precio nacional del petróleo. Ante ello, señaló que se debería de reforzar la seguridad energética nacional y refirió que se debería asegurar, para garantizar que este insumo, que es un regalo de este yacimiento. El otro tema, es que el mercado de gas, ya está establecido y lo que se tiene que reforzar es la red de distribución de gas, porque no se está haciendo redes auxiliares de distribución de gas natural a las zonas deprimidas de lima.

El señor presidente preguntó, qué opina de la propuesta que ha elaborado la comisión de los hidrocarburos para ampliar por 10 años más las concesiones que hay cerca de Talara.

Sobre ello, **el señor Sebastián Barreda Tamayo,** dijo que es otro tema que se está viendo en la universidad en la que trabaja y en la cual el objetivo básico que tuvo la privatización, eran esos campos de producción de petróleo donde Petroperú era competidor de otras empresas internacionales. Es como el caso de los grifos en Petroperú, ellos no son dueños, son concesionados, dado que llevan la bandera, porque Petroperú comercializa allí sus combustibles, pero el que fija los precios, son los dueños de los grifos.

Entonces, en caso de Petroperú hoy se está pagando precio y explicó sobre el precio de la gasolina. Señaló que sería una gran cosa, es el objetivo de tener la integración vertical, en este caso se tiene la suerte de tener el petróleo al costado, se ha explotado y a lo largo de 30 años tiene la explotación en manos privadas, lo que se ha hecho es descremar el petróleo, han bajado la producción, la reserva, y ahora que sube el precio de petróleo, sigue la misma producción. En esa situación, dijo que definidamente tal como se planificó y ese es el plan que se tiene para este gobierno, esos lotes se terminaron, ya tuvieron todas las extensiones, que devuelvan al Estado ahora Petroperú, este es otro argumento para recuperar su posición de empresa integrada de petróleo como lo tienen todos.

Ante lo expuesto, **el señor Presidente** precisó que entonces, no sería conveniente que un tercero siga, porque no hay un análisis de costo y beneficio.

El señor Héctor Plate Cánepa, presidente del Organismo Peruano de Consumidores y Usuarios (OPECU) añadió y resaltó la importancia de la existencia de la seguridad energética nacional y dio alcances de los antecedentes de los precios del GLP, y dijo las razones fundamentales para reforzar esta situación en debate.

El congresista Germán Tacuri Valdivia observó y manifestó que cuando se habla de inversiones y en este caso, cuando se entrega dinero a los más necesitados, dicen que es un gasto populista; sin embargo, cuando se brinda dinero a las empresas transnacionales, se llama reactivación económica. Ante ello, dijo que es una contradicción, por ello cree que también sería conveniente cuando la empresa dice, *es que se tiene en stock y se tiene que gastar todo para bajar el precio;* entonces siguen ganando; bueno, ellos nunca van a perder.

Asimismo, sobre el tema a la seguridad energética, indicó que cree que es un tema fundamental, que se tiene que tratar desde el Congreso y desde el ejecutivo, para que se pueda garantizar de que este producto se tenga en décadas para proveer de energía, gas, petróleo o gasolina a nivel nacional. También, señaló que ya queda claro que Petroperú tiene que robustecerse, no solo como refinería, sino que empiece a poner sus estaciones de grifos, para poder proveer directamente a la población y a los hermanos transportistas, en general a todos.

El señor Presidente indicó que se evaluará los aportes para plantear pronto un texto sustitutorio en su momento.

5.3 Predictamen recaído los proyectos de ley 1217/2021-CR Y 1221/2021-CR que, con texto sustitutorio, proponen la ley que modifica la ley 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, garantizando la atención personal del proveedor al ofrecer sistemas de atención automatizada

El señor Presidente sustentó el contenido de los alcances del predictamen recaído en los proyectos de ley 1217/2021-CR y 1221/2021-CR que, con texto sustitutorio, proponen la ley que modifica la ley 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, garantizando la atención personal del proveedor al ofrecer sistemas de atención automatizada, el cual fue oportunamente distribuido vía digital a los despachos de los señores congresistas miembros de la Comisión.

Señaló que las propuestas legislativas tienen como objeto solucionar una problemática que se viene presentando de manera recurrente en la atención de los consumidores a través de plataformas virtuales, utilizando inteligencia artificial, o los llamados *boots* o *chat boots*. El proyecto de ley propone dos supuestos, siendo el primero el reconocer al consumidor un derecho general: a ser atendido en forma personal por el proveedor, a través de su representante, ante la solicitud de información del producto o servicio, o ante la presentación de reclamos o quejas.

Dijo que al respecto, de las opiniones que se han recibido y analizado, señalan que este supuesto no permitiría el funcionamiento de algunos canales de información o atención como aplicaciones móviles, páginas web, cajas de autoservicio de supermercados, sistemas de cobro automático de playas de estacionamientos, cajeros electrónicos de los bancos y máquinas expendedoras de productos; a menos que se instale un mecanismo que permita solicitar asistencia de parte de personal del proveedor, razón por la cual estamos acogiendo esta opinión técnica.

El predictamen con el fin de no contradecir la actual regulación, sobre atención de reclamos o quejas en el libro de reclamaciones, que en ningún supuesto requiere de la atención en persona del consumidor por parte de un representante del proveedor, acoge las observaciones de este primer supuesto.

En cuanto al segundo supuesto, refirió que se propone que se establezca una obligación para los proveedores en caso se haga uso de herramientas virtuales o asistentes digitales en los canales de comunicación: la utilización de herramientas virtuales o asistentes digitales en los canales de comunicación que pueda implementar el proveedor, para que siempre deba tener la opción de comunicarse con un asistente personal no digital. Este punto ha merecido opinión favorable por parte de la autoridad de consumo, el Indecopi. Por ello, luego del análisis correspondiente, se considera importante y necesario garantizar el acceso a información oportuna, suficiente, veraz y fácilmente accesible para el consumidor, sin que esto suponga una carga regulatoria que atente contra la innovación tecnológica.

Asimismo, indicó que el predictamen evalúa todas las opiniones recibidas y se ha privilegiado el derecho a la información de todo consumidor, como su primer y más importante derecho; es por ello que se justifica la exigencia de la atención personalizada como una opción o alternativa y solo cuando el proveedor ofrezca cualquier sistema de atención automatizada asistido por inteligencia artificial o asistente digital. Este dictamen hará que se adopten procesos más eficientes y con ello se va a mejorar la imagen corporativa y la reputación de las empresas frente a sus clientes o consumidores. Por ello, es importante otorgar mayor

confianza a los usuarios y así se fomentará una cultura interna de respeto a la normativa de consumo, reduciendo las contingencias como los reclamos y denuncias.

Finalmente, señaló que este dictamen, tal como lo propone el texto sustitutorio, mejorará el sistema de atención en la información del producto o servicio y/o la atención de reclamos o quejas que se realizan a través asistentes virtuales.

El señor Presidente abrió el debate e invitó la participación de los señores congresistas miembros de la Comisión.

No habiendo intervención, el **señor presidente** solicitó a la secretaria técnica llamar a los congresistas para que señalen el sentido de su voto.

Seguidamente, **el señor Presidente** sometió a votación nominal de los congresistas miembros presentes en la sala virtual y presencial de la Comisión, el dictamen recaído en los proyectos de ley 1217/2021-CR Y 1221/2021-CR que, con texto sustitutorio, proponen la ley que modifica la ley 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, garantizando la atención personal del proveedor al ofrecer sistemas de atención automatizada.

Luego de la votación nominal, el dictamen fue aprobado por **UNANIMIDAD**: con 8 votos a favor de los señores congresistas José Luna Gálvez, Adolfo Tacuri Valdivia, Janet Rivas Chacara, Luis Cordero Jon Tay, Auristela Obando Morgan, Silvia Monteza Facho, Miguel Ángel Ciccia Vásquez y Américo Gonza Castillo quien consignó su voto a favor a través de la plataforma. No hubo votos en contra, ni abstenciones.

5.4 Predictamen recaído en el Proyecto de Ley 1375/2021-CR que, con texto sustitutorio, propone la ley que simplifica el registro, renovación y protección de las marcas

El señor Presidente señaló que como se recuerda, este predictamen estuvo en debate en la sesión anterior y quedó en cuarto intermedio. La Comisión recibió los aportes de los congresistas Diego Bazán y Adriana Tudela, y se coordinó con la autoridad de marcas que es el Indecopi.

Al respecto, dijo que en el caso del artículo 61-C, bajarlo a 40 días, como era la propuesta de los colegas congresistas, el Indecopi ha señalado que le resulta humanamente imposible, considerando que hay que tomar en cuenta que puede plantearse observaciones y notificarse para absolución a los solicitantes en 30 días hábiles. Respecto del artículo 64-B, de igual modo, las solicitudes de actos modificatorios implican un análisis más complejo y minucioso e incluso plazos mayores para la absolución de requerimientos. En este caso, solo esos plazos se extienden a 60 días hábiles. Por estos argumentos, se considera mantener la propuesta inicial.

El señor Presidente abrió el debate e invitó la participación de los señores congresistas miembros de la Comisión.

No habiendo intervención, el **señor presidente** solicitó a la secretaria técnica llamar a los congresistas para que señalen el sentido de su voto.

Seguidamente, el **señor Presidente** sometió a votación nominal de los congresistas miembros presentes en la sala virtual y presencial de la Comisión, el dictamen recaído en el Proyecto de Ley 1375/2021-CR que, con texto sustitutorio, propone la ley que simplifica el registro, renovación y protección de las marcas.

Luego de la votación nominal, el dictamen fue aprobado por **UNANIMIDAD:** con 9 votos a favor de los señores congresistas José Luna Gálvez, Américo Gonza Castillo, Adolfo Tacuri Valdivia, Janet Rivas Chacara, Luis Cordero Jon Tay, Auristela Obando Morgan, Silvia Monteza Facho, Miguel Ángel Ciccia Vásquez e Ilich Fredy López Ureña. No hubo votos en contra, ni abstenciones.

El señor Presidente solicitó la dispensa del trámite de aprobación del acta para ejecutar los acuerdos adoptados en la presente sesión, el mismo que fue votado a micrófono abierto, sin ninguna oposición, aprobándose por unanimidad.

Finalmente, levantó la Décima Octava Sesión Ordinaria, siendo las 13 horas con 49 minutos.

JOSÉ LEÓN LUNA GÁLVEZ
Presidente

AMÉRICO GONZA CASTILLO
Secretario

La trascripción magnetofónica que elabora el Área de Transcripciones del Departamento del Diario de Debates del Congreso de la República, es parte integrante de la presente Acta.

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: LUNA GALVEZ Jose Leon FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 06/05/2022 17:10:07-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: GONZA CASTILLO Américo FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 06/05/2022 09:47:42-0500